

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

TRABAJO FÍN DE MÁSTER
MÁSTER EN PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR



Autor: Ana Isabel González Aguilera. 54137633-A

Tutor: Prof. Dr. Fernando Rodríguez Alonso

Madrid

29/04/2020

AGRADECIMIENTOS

Después de una constante lucha, esfuerzo y sacrificio me gustaría agradecer a aquellas personas que han hecho posible el que hoy este aquí escribiendo estas líneas, permitiéndome disfrutar y vivir apasionada de esta materia.

A mi pareja, Manolo Martín Moya, por su constante ayuda y su apoyo incondicional, por soportarme y animarme, por no dejar que me rinda nunca y levantarme cada vez que me caigo.

A mis padres y mi hermana, Loli, Manolo y Eva porque les debo todo a ellos... Por enseñarme los valores más importantes de esta vida, por demostrarme que todo cuesta y conlleva un gran esfuerzo y sacrificio.

Por último, a Don Fernando Rodríguez Alonso, por su tiempo, su ayuda y su enorme sabiduría, por ser mi tutor y guía en la confección de este proyecto, por la gran motivación e inspiración que ha transmitido.

Gracias.

ÍNDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS	5
METODOLOGÍA	6
OBJETIVOS.....	6
RESUMEN	7
I.INTRODUCCIÓN	7
II. ORÍGEN	12
2.1 LA MINORÍA DE EDAD EN EL PENSAMIENTO DOCTRINAL PENAL DEL SIGLO XX.....	12
2.1.1 La escuela positiva de Ferri.....	12
2.1.2 La escuela correccionalista de Dorado Montero.	14
2.2 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE MENORES EN ESPAÑA.	14
2.3 DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN DE MENORES DESDE EL SIGLO XIX HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES DE 1948.....	19
2.4 ANÁLISIS DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES DE 1948.	21
III. REGULACIÓN PENAL	24
3.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR	25
3.1.1 NORMATIVA ANTERIOR AL ESTADO DE DERECHO	26
3.1.2 DERECHO POSITIVO ESPAÑOL EN EL ESTADO DE DERECHO	31
3.2 LA MODIFICACIÓN DEL LÍMITE MÍNIMO DE EDAD PENAL. EL MENOR INFRACTOR COMO SUJETO RESPONSABLE EN LA ACTUALIDAD	39
3.3 LA VIGENTE NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR.....	47
3.4 REFORMA LEGISLATIVA	59
3.4.1 Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre	59

3.4.2 Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre y Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre.....	61
3.4.3 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre	62
3.4.4 Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre	62
3.5 AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR	65
3.6. MEDIDAS COMO CONSECUENCIA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR	70
3.6.1 Medidas aplicables a los menores	70
3.6.2 Medidas privativas de libertad	72
3.6.3 Medidas no privativa de libertad con orientación educativa	75
3.6.4 Las medidas complementarias de las con orientación educativa	81
3.6.5 Medidas cautelares	82
3.6.6 La mayoría de edad	83
3.7 LA CONCILIACIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO	84
3.8 REGLAS ESPECIALES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL	85
3.9 INCOACCIÓN Y LEGITIMACIÓN.....	86
3.10 EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL	86
3.11 PROCEDIMIENTO SENTENCIA Y RECURSOS.....	87
IV. ANÁLISIS DOCTRINAL	87
V. ESTADÍSTICAS.....	90
VI. CONCLUSIÓN.....	93
VII. BIBLIOGRAFÍA	96
VIII. ENLACES.....	102
IX. LEGISLACIÓN	103
X. JURISPRUDENCIA	108

LISTADO DE ABREVIATURAS

Art.: Artículo

Arts.: Artículos

CE: Constitución Española

CP: Código Penal

CC: Código Civil

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

MF: Ministerio Fiscal

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TS: Tribunal Supremo

TSJ: Tribunal Superior de Justicia

LORPM: Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor.

LTTM: Ley de tribunales tutelares de menores.

METODOLOGÍA

El presente trabajo fin de máster se ha realizado mediante un procedimiento de investigación jurídica, encuadrándose en la teoría de la pena, así como el estudio exhaustivo de jurisprudencia, legislación y bibliografía, con el objetivo de obtener toda la información jurídica acerca de la responsabilidad penal del menor.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de las sentencias que recogen algunos de los casos en los que menores son condenados a privación de libertad por responsabilidad penal.

Finalmente se ha procedido al análisis normativo, social y político de dicha pena, para en última instancia, como objetivo, valorar si es congruente la aplicación de dicha pena según la edad y no otros factores personales del menor.

OBJETIVOS

El principal objetivo propuesto es valorar la congruencia o incongruencia en la determinación de una edad para responsabilizar penalmente a un menor.

Como objetivo secundario, analizar si nuestra actual legislación, jurisprudencia y bibliografía valoran no solo el factor edad sino también el personal, psicológico y social para imponer la pena de privación de libertad a un menor de edad por responsabilidad penal.

RESUMEN

Tras numerosas reformas, se aprueba la Ley 5/2000, de 12 de enero, por la que se establece la responsabilidad penal del menor.

Momento en el que queda establecido oficial y legalmente la responsabilidad en el menor, alegando el legislador para su efectiva aplicación dos tramos de edad comprendidas en; de 14 a 16 y de 16 a 18, con una única diferencia que radica en la duración de la medida, siendo el primer tramo de menor duración que en el segundo. Pero, no teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares, incluso psicológicas del menor para considerarlo responsable penalmente y subsidiariamente aplicarle una pena determinada.

En este sentido, el legislador determina que son los 14 años el momento en el que el menor adquiere la madurez suficiente, y por tanto ser responsable penalmente de sus actos ilícitos.

I.INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fin de máster, tiene como objeto, el estudio de la responsabilidad penal del menor, ofreciendo una aproximación en cuanto a su concepto y antecedentes históricos. Por otro lado, se tratará la regulación jurídica del menor, la legislación vigente y consideración de la edad del menor como responsable penalmente por la comisión de algún delito; típico, antijurídico, culpable y punible.

La responsabilidad penal del menor es definida jurídicamente por la Real Academia Española, en el diccionario del español jurídico¹ como: *“Responsabilidad que le es exigible a los mayores de catorce años y menores*

¹ Página oficial de la Real Academia Española, en la que se define el término “responsabilidad penal del menor”.

<https://dej.rae.es/lema/responsabilidad-penal-de-menores>

de dieciocho que cometen hechos tipificados como delitos en el Código Penal y en las restantes leyes penales especiales”.

Por otro lado, es necesario hacer alusión a la “edad penal”, definida como: *“Edad a partir de la cual puede exigirse a una persona responsabilidad por la comisión de hechos típicos como delito o falta”*². Es muy importante esta acepción, pues es la base del estudio para determinar la responsabilidad penal del menor.

Jurídicamente, la responsabilidad penal del menor, respecto al ámbito penal, está regulada en la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, constituye el pilar fundamental que ampara al menor infractor; concretamente en el artículo primero³ establece: *“Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”*.

Además, la Constitución Española de 1978, aunque no se refiere expresamente a la justicia de menores, indirectamente está vinculada a dicha materia, si bien, hace alusión de ello en los siguientes artículos⁴: 12 (mayoría de edad) y 39 (protección a la infancia). La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, hace mención a la jurisdicción de menores, concretamente en los artículos⁵: 82.1 (la Audiencia Provincial es la encargada de conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de los juzgados de Menores), 96 (habrá un juzgado de menores en general, por cada provincia), 97 (se establece la competencia objetiva de los citados órganos en primera instancia)⁶.

De todo ello se deduce que, para considerar responsable penalmente a un menor, tienen que cumplirse dos características fundamentales; por un lado, la existencia en la comisión de un hecho típico y, por otro lado, que el autor del

² Página de la Real Academia Española, con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, donde se define el concepto de “edad penal”, en términos jurídicos.
<https://dej.rae.es/lema/edad-penal>

³ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, B.O.E. núm. 11, de 13 de enero de 2000.

⁴ Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, B.O.E. núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

⁵ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, B.O.E. núm. 157, de 2 de julio de 1985.

⁶ DE LOS SANTOS MARTÍN OSTOS J., *Jurisdicción Penal de Menores*, editorial Juruá, Lisboa, 2016, páginas 27-29.

hecho tenga una edad comprendida entre 14 y 18 años. Cumpliendo estos requisitos, estaríamos ante un supuesto de responsabilidad penal de menores.

Una pregunta que surge a menudo es, ¿Por qué se delimita la edad en 14 y no en 13 o 15 años?, este será uno de los temas que se tratará haciendo especial mención a la respuesta o pronunciamiento de la jurisprudencia respecto a esta cuestión.

Para conocer el inicio de la responsabilidad penal del menor, es necesario un previo estudio, comenzando por el conocimiento de la delincuencia juvenil en la historia, no solo en el ámbito social, sino también jurídico.

La delincuencia juvenil ha sido una de las preocupaciones que ha estado latente en todos los tiempos. Ofrecer una respuesta correcta para controlar el daño que causan los jóvenes a los demás ha sido objeto de debate continuo. Muchas son las ciencias que han aportado conocimientos sólidos (psicología, sociología, criminología, etc.) que nos permiten comprender la infancia y juventud como *una fase vital caracterizada por la falta de madurez, la impulsividad, y la menor experiencia vital, pero también por una mayor receptividad al cambio y a las medidas educativas y responsabilizadoras*⁷.

Cuando el menor comete un delito, considerado como grave, mediando la violencia, las instituciones especializadas, encargadas de dar respuesta, han demostrado en estos casos una falta o ausencia de consenso, afloran las dudas y contradicciones. Consecuentemente la prioridad de educación como medio de corrección se pone en entredicho.

Por otra parte, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales en materia de responsabilidad penal de menores, en primer lugar, la existencia de un daño producido, consistente en un delito tipificado que se tendrá que reparar y en todo caso, castigar; por otro lado, la condición de la minoría de edad del infractor por el que se exigirá un castigo diferente tendente en la oportunidad de cambio.

Afirmar que los niños son totalmente diferentes a los adultos es obvio, hecho que se ha mantenido en toda la trayectoria evolutiva y social. Hoy día esta idea sigue

⁷ FERNÁNDEZ MOLINA.E. Y BERNUZ BENEITEZ. M.J, *Justicia de menores*, editorial Síntesis, Madrid, 2018, página 11.

tendente. La fase de desarrollo previa en la madurez, los rasgos físicos y morales son aspectos que indican con suficiente claridad la diferencia entre adultos y niños.

Según lo expuesto anteriormente, las medidas coercitivas orientadas a la reinserción y reeducación, no pueden ser las mismas para los adultos infractores que para los menores, pues no se encuentran en la misma fase biológica, de desarrollo personal y psicosocial. Es por ello, que el legislador a determinado una serie de medidas específicas para los menores infractores, cuya edad oscile entre los 14 y 18 años, con el objetivo de dar respuesta, educación, esperanza y protegerle.

Los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los pioneros a nivel mundial en la instauración de tribunales para el tratamiento de menores infractores, concretamente en 1899, en Chicago⁸. Dicho órgano fue denominado como Tribunal para Jóvenes del Condado de Cook, fue creado gracias a los impulsos de asociaciones privadas como Bar Association Women`s Club, junto con el esfuerzo de juristas y asociaciones de tipo benéfico. Todo este esfuerzo y movilización tuvo como resultado la creación y aprobación de la Ley de 21 de abril de 1899, que no entraría en vigor hasta el día 1 de junio del mismo año.

Esta nueva institución tuvo un gran éxito, expandiéndose por todos los estados de América del Norte, diez años después todos los estados tenían implantado esta institución para jóvenes.

Las características de estos novedosos Tribunales para Jóvenes en América, fue la especialización del propio Tribunal, la supresión de la prisión para los menores y el régimen de la libertad vigilada⁹.

⁸ DE LOS SANTOS MARTÍN OSTOS J., *Jurisdicción Penal de Menores*, editorial Juruá, Lisboa, 2016, páginas 21-22.

⁹ ZARANDIETA MIRANBENT. E, *La delincuencia de los menores y los Tribunales para niños*, imprenta clásica española, 1916, página133.

Este gran proyecto, se extendió por toda Europa¹⁰, implantándose en Inglaterra en el año 1908, Italia en 1909, Portugal en 1911, Francia en 1912, Bélgica en 1912, Hungría en 1913, Suiza en 1914...

En España, la justicia penal de menores llega con la constitución de dos grandes instituciones, una de carácter privado y otro público. Respecto a esta última, la llamada “El padre de huérfanos”, dedicado a acoger a los niños abandonados, apareció en Valencia en el siglo XIV, concretamente, el 6 de marzo de 1337, por privilegio del Rey Pedro II de España y IV de Aragón, conocido como el Ceremonioso. Se extendió por Aragón y Navarra, llegando hasta Castilla en el siglo XVII como Padre General de Menores, desapareciendo en 1793, por mandato de Carlos IV.

Esta institución estaba conformada por los llamados “curadores”, personas encargadas de proteger a los niños abandonados, pudiendo incluso ejercer funciones de corrección hacia los mismos. Dependían de la Justicia civil¹¹. Más adelante, con el paso del tiempo, pasó de tener una función protectora, asistencial y de readaptación a convertirse en un correccional, convirtiéndose prácticamente en un Juez penal encargándose de la imposición de castigos a menores¹².

En cuanto a la institución privada de que anteriormente se hace mención, se denomina “Los Torbillos de Sevilla”, fundada por Torbillo de Velasco, en 1725, se dedicaba a la recuperación social de los menores delincuentes y abandonados, sin tener en cuenta las normas penales, inspirados por el espíritu de corrección y protección. Esta institución surge como consecuencia de la multitud de menores que vivían como mendigos en las calles de Sevilla en aquella época¹³.

Comenzaron recogiendo a los niños que se encontraban abandonados en las calles, ofreciéndoles alimento, enseñanza y oficio. Este hecho es de gran transcendencia, pues constituye un gran ejemplo y antecedente del hoy día

¹⁰ AGUDELO HERRERO.J, *La protección de los menores en EEUU y Europa a finales del siglo XIX y principios del XX*, en *anuario de Justicia de Menores*, 2012, nº XII, páginas 149-201.

¹¹ DE ROJAS.F, *El padre de huérfanos de Valencia*, editorial Vives Mora, Valencia, 1927, páginas 12 ss.

¹² CAMARA ARROYO. S, *Internamiento de menores y sistema penitenciario*, volumen I, Premio Nacional Victoria Kent, Ministerio del Interior, Madrid, 2011, páginas 101 ss.

¹³ AGUDELO HERRERO. J; *Los Toribios de Sevilla y los orígenes de la protección de los menores*, en *anuario de justicia de menores*, 2009, nº IX, Páginas 69-151.

*denominado centro de internamiento de menores. Se puede decir, que su estructura organizativa, funcionamiento interno, objetivos perseguidos y medios empleados, pueden servir de orientación para los actuales centros de reforma de menores infractores*¹⁴.

Según Enrique Zarandíeta: *“Todos los asuntos que lleven consigo el enjuiciamiento de un niño, por infracción del Código Penal, ante cualquier Tribunal de policía o justicia, podrá oírse o fallarse por estos Tribunales en las horas que fije y con separación de otro asunto criminal, registrándose las actas en libros distintos”*.¹⁵

Para concluir, se expondrá una valoración general de la jurisdicción de menores en España, así como los nuevos enfoques sobre la respuesta a la delincuencia juvenil, haciendo especial incidencia en el sentido del castigo en la justicia de menores.

II. ORIGEN

2.1 LA MINORÍA DE EDAD EN EL PENSAMIENTO DOCTRINAL PENAL DEL SIGLO XX.

2.1.1 La escuela positiva de Ferri.

El pensamiento científico del siglo XIX, concretamente con la filosofía positiva, determinó la evolución de la ciencia penal, y el nacimiento de la Criminología como una disciplina científica.¹⁶

Según la corriente positivista, solo merecía denominar “científicos” los estudios que se llevaban a cabo mediante métodos de ciencias naturales. En este sentido,

¹⁴ DE LOS SANTOS MARTÍN OSTOS J., *Jurisdicción Penal de Menores*, editorial Juruá, Lisboa, 2016, páginas 23-24.

¹⁵ ZARANDIETA MIRANBENT. E; *La delincuencia de los menores y los Tribunales para niños*, imprenta clásica española, 1916, páginas 125-126.

¹⁶ GARCÍA -PABLOS, A; *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juristas*, 2ªed., Valencia. 1996, página 92, que la escuela positiva italiana o positivismo criminológico, sella a finales del siglo XIX los orígenes de esa nueva Ciencia, denominada Criminología. De ahí, que se hable de dos etapas o momentos en la evolución de las “ideas” sobre el crimen: la etapa “precientífica” y la “científica”, cuya línea divisoria viene dada por la Escuela positiva, esto es, el paso de la especulación, de la deducción, del pensamiento abstracto- deductivo a la observación, a la inducción y al método positivo.

la Escuela positiva, en contraposición a los principios doctrinales de la Escuela clásica, negó la existencia del libre albedrío en el hombre, este hecho tuvo como consecuencia la pena como medio de defensa social.¹⁷

En 1933 se creó la Ley de Vagos y Maleantes influenciada por el positivismo aplicando medidas de seguridad muy parecidas a quienes no habían cometido delitos, pero podían llegar a cometerlos.¹⁸

La Escuela positiva defendió que el menor infractor cometía el delito como consecuencia de dos factores: por un lado, los internos, que tenían taras hereditarias consecuentes del alcoholismo, sífilis y enfermedades mentales; y, por otro lado, los factores externos o sociales de abandono, desamparo, producidos por la falta de hogar, medio ambiente destructivo o falta de una adecuada educación. Como consecuencia de estas causas el menor no merecía castigo, sino recibir una tutela, reforma y educación, dependiendo en todo caso de las circunstancias personales y particulares.¹⁹

Posteriormente, César Lombroso ofreció un criterio antropológico, consistente en la idea de las huellas embrionarias de la locura moral y la de la delincuencia, ambas se hallaban normalmente en el niño que demostraba vicios como la cólera, venganza, mentira, ausencia de sentido moral, egoísmo o crueldad. Este pensamiento dio a entender que teniendo estas características en la infancia el menor podía llegar a cometer delitos, así como en la adolescencia seguían cometiéndolos, pudiéndose convertir en verdaderos delitos en adulto. El delincuente que persistía en acciones ilícitas, era considerado un anormal.²⁰

Según la escuela positiva en cuanto al Derecho tutelar de menores, y el mismo sentido, FERRI han expresado “se adopta para los delincuentes menores no la tradicional pena-castigo, llamada intimidatoria, sino una serie de medidas defensivas, educadoras y curativas adaptadas, no a los pretendidos grados de discernimiento y culpabilidad moral, sino a la diversa peligrosidad y

¹⁷ ZUGALDIA ESPINAR, J.M; Fundamentos de derecho penal. Parte general, página 184.

¹⁸ LALINDE ABADIA, J; Iniciación histórica al Derecho Español, página 571.

¹⁹ MENDOZA, J.R; La protección y el tratamiento de los menores, página 5.

²⁰ MENDOZA, J.R; La protección y el tratamiento de los menores, páginas 5 y 6.

readaptabilidad social de estos sujetos conscientes, pero con una voluntad no madura”.²¹

Finalmente, en cuanto a la doctrina jurídico-penal de la Escuela clásica se vio alterada por parte de la Escuela positiva a finales del siglo XIX, cuyo núcleo central giraba en torno a la negociación del libre albedrío, basada en que los hombres no son considerados como libres para determinarse frente a las normas, sino que por el contrario su voluntad depende de factores diversos como son: individuales, físicos y sociales. En este sentido, FERRI manifestaba que la imposición únicamente de la pena sería ineficaz y que por tanto se requería del acompañamiento a dicha pena de reformas económicas y sociales para que fuese eficaz.²²

2.1.2 La escuela correccionalista de Dorado Montero.

Se destaca a ALAMILLO como defensor de la Escuela correccionalista y la escuela positiva italiana de la que emerge el Derecho que protege a los criminales. Por otro lado, se hace especial mención a MONTERO RÍOS, en aquellos entonces ministro de Gracia y Justicia, ha sido considerado “el padre del correccionalismo español”.

Finalmente, desde la perspectiva correccionalista de DORADO MONTERO, los menores de edad eran considerados como sujetos débiles necesitados de protección.

2.2 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE MENORES EN ESPAÑA.

La primera institución de menores fue creada en Valencia en el año 1337 mediante la figura de Fuge et Pare d’Orfens, gracias al rey Pedro IV, El Ceremonioso, conocido también como El del Punyalet. Esta figura funcionó en territorios como Aragón, Valencia y Navarra hasta 1793. Concretamente en este año fue eliminada por Carlos IV. ²³

²¹ LADINDE ABADÍA, J; Iniciación histórica del Derecho español, página 570.

²² GARCÍA-PABLOS, A; Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juristas, página 113.

²³ Lasala G; Instituciones de protección y reforma en Valencia, *Surgam*, 1955, páginas 18-24.

La función de la mencionada institución fue la de recoger a menores vagabundos y ociosos, huérfanos o desvalidos que ambulaban por las calles, e ingresarlos o internarlos en la Casa Común, con el objetivo de ofrecerles la formación necesaria para que pudieran aprender un oficio, además funcionaban como Tribunal con respecto a los menores acusados por la comisión de hechos delictivos.²⁴

El objetivo principal de la mencionada institución era benéfico y educativo, sin que se exigiese para el desempeño del cargo de Curador, la salvación de la juventud, en este mismo sentido, serían presidentes de los Tribunales Tutelares de Menores.²⁵

En 1407, gracias al rey Don Martín, dotó al Curador y Padre de los Huérfanos de plena potestad en materia delictiva de los menores. De este modo quedó establecido el Tribunal de los Huérfanos o Juzgado. Entrado ya el siglo XVII, los castigos impuestos a los jóvenes delincuentes eran verdaderamente crueles, consistentes en: azotes, galeras, mutilaciones, exposición en la picota. Todo estos estaban tipificados en las leyes de aquellos tiempos. Desgraciadamente no eran estos los únicos que sufrían dichos castigos, los vagabundos también los padecían.²⁶

La crueldad y el abuso hacia los niños en ciertos lugares de España, como por ejemplo en Cataluña, fue un hecho de gran relevancia, concretamente en el año 1131 por el Rey de Aragón, Alfonso el Batallador. En esta época el propio padre podía matar a su hijo si este no le obedecía.²⁷

Por el contrario, Alfonso X el Sabio protegió y defendió a los niños frente a la crueldad de los padres, pudiéndoles imponer hasta cinco años de destierro, siempre que se demostrara que el fallecimiento del menor era causa de los malos tratos causados por sus propios padres. Desafortunadamente, el Rey fue

²⁴ Roca T; El padre de los huérfanos en Zaragoza, *Surgam*, 1954, páginas 27-32.

²⁵ Roca T; *Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España*, Madrid, Consejo Superior de Protección de Menores, 1968, páginas 1-26.

²⁶ Juderías J., *Problemas de la infancia delincuente*, Madrid, Pro Infancia, 1910, páginas 1-13.

²⁷ Lasala, G., La juventud delincuente en España y sus tribunales de menores, *Surgam*, 1954, páginas 6-14.

dejando poco a poco de proteger a estos menores. En los siglos XVI y XVII, el Gobierno español no hizo nada al respecto.²⁸

Ya en el siglo XVII, y sobre todo a comienzos del siglo XVIII, se extendió la práctica en la creación de hospicios, casas de expósitos y casa de misericordia. Las cuales tenían como propósito y objetivo la recogida de niños abandonados. Por otro lado, los hospicios eran centros de acogida y asilo de niños. La aglomeración era característico de dichos centros.

En 1723, se fundó el llamado, Hospicio de Sevilla, gracias a Toribio de Velasco, teniendo muy pocos medios, creó dicha institución para reformar el carácter y las costumbres desviadas de los menores delincuentes. Esta institución fue conocida como los Toribios, en honor a su creador. Fue esta la primera institución que hizo posible y permitió la participación de los menores para mejorar su propia conducta y educación.

La mencionada institución se regía mediante el registro y control de cada uno de los menores, además ofrecía diferentes talleres para la formación profesional. Toribio de Velasco fue pionero en cuanto al favorable cambio de los menores en centros de internamiento.

Roca ya hablaba del ingenio de los Torbillos adelantándose a la famosa institución norteamericana *George Junior Republic* de 1887. Dicha institución fue reconocida históricamente como la pionera de todas las instituciones caracterizadas por la reeducación de los menores delincuentes en aquella época.²⁹

En este sentido, Roldán Barbero, consideró, que la casa Sevillana permaneció activa todo el siglo XVIII ofreciendo un tratamiento personalizado a cada menor.³⁰

En 1730 fallece Toribio de Velasco, fundador del Hospicio en Sevilla, esto hecho causó la ruina de este centro que acabó desapareciendo. Posteriormente, durante el reinado de Carlos III se produce un significativo adelanto en materia

²⁸ Deleito J., *La mala vida en la España de Felipe IV*, Madrid, Alianza, 1987, página 217.

²⁹ Mause, LL., *Historia de la Infancia*, Madrid, Alianza, 1982, página 1-4.

³⁰ Roldán Barbero, H., *Historia de la prisión en España*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988. Páginas 1-263.

de protección social a los menores, tratando de eliminar los criterios que inspiraron la dura penalidad y los severos castigos. Este hecho produjo un cambio consistente en el paso de unas medidas inhumanas a unos procedimientos tutelares y educativos.³¹

Cronológicamente, en el año 1796, Carlos IV, creó un Reglamento para las casas de expósitos, con el objetivo de redimir el infanticidio, verdaderamente frecuente en las madres con hijos espurios, facilitándoles a las madres la entrega de sus hijos a las instituciones de forma anónima.

Según el ilustre Fernández Vargas, se puede pensar que ni las condiciones de vida de estos niños, ni las expectativas de futuro de los supervivientes debieron ser muy esperanzadoras, pues las medidas impuestas por Carlos IV, fueron esporádicas, esto supuso un retroceso importante en la protección de la infancia.³²

El menor antisocial se mantuvo muchos años en el olvido, no fue hasta la llamada ordenanza de presidios de 1834 en el que se retoma la preocupación por este grupo social en España. Dicha ordenanza permitía la separación en la prisión de los adultos y menores delincuentes.³³

El problema se encuentra durante el siglo XIX y comienzos del XX no existiendo intervención del Estado en los problemas surgidos por menores delincuentes, por ello, se estableció la vigencia del sistema de hospicios y casa de expósitos para unos y la cárcel común para otros.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en el siglo XIX fue cuando los poderes públicos, dotaron a los menores como sujetos de identidad propia y con unas necesidades especiales.

Sin embargo, los códigos penales del siglo XIX se caracterizaban por ser retribucionistas, no señalaban tampoco la distinción sustancial entre el delincuente menor y el adulto.³⁴

³¹ Juderías, J., *La juventud delincuente*, Madrid, Jaime Ratés, 1912, páginas 1-11.

³² Fernández Vargas, V., *El niño y el joven en España (siglos XVIII-XX)*, Barcelona, Anthropos, 1989, páginas 9-163.

³³ Juderías J., *Problemas de la infancia delincuente*, Madrid, Pro Infancia, 1910, páginas 121-138.

³⁴ Guallart, J., *El derecho penal de los menores*. Zaragoza, La Académica, 1925, página 53.

En este sentido, los gobiernos y dirigentes de la época mostraban un gran interés por el bienestar de los menores. Consecuencia de todo ello fue la gran oleada de grupos de ciudadanos beneficiados de forma privada, apoyada por una sociedad sensibilizada. Durante este periodo histórico-social aparecieron nuevas instituciones dedicadas a la protección, custodia y reeducación de los menores delincuentes.

Se hace especial alusión a la labor reformadora del coronel Montesinos en el presidio de Valencia en la mitad del siglo XIX. Montesinos trabajó para demostrar que se podía conseguir la separación de los niños presos de los mayores, desarrollando una sección o espacio para aquellos menores de dieciocho años de los adultos. Además, creó talleres y una escuela, a ello se une la iniciativa que propuso consistente en que los niños estuviesen siempre asistidos por los mejores funcionarios con el objetivo de suavizar el rigor que padecían hasta entonces.

Ya centrándonos en el siglo XIX, se crea una especial preocupación en cuanto a la desviación social de los menores, este hecho ocasionó la aparición del primer Tribunal para niños en el año 1899.³⁵

En esta época, surgieron leyes e instituciones con el objetivo de afrontar la difícil situación de los niños abandonados, vagabundos, delincuentes, así como las familias avocadas a la delincuencia.

Según Rivera Cañizares: “En todo el reino son de aplicación general leyes también orientadas como la de 1878, sobre los trabajos peligrosos de los niños; la de 1900, sobre trabajo de mujeres y niños en talleres y fábricas; la de 1903, sobre la represión de la mendicidad de menores, y la de 1904 sobre protección a la infancia, así como la de 31 de diciembre de 1908, reguladora de la prisión preventiva de menores”.³⁶

En 1880 se inauguró el llamado Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la redención de niñas y niños presos de la ciudad de Barcelona. En el año

³⁵ Platt, A., *Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia*, México, Siglo XXI, 1982, página 97.

³⁶ Ribera Cañizares, M., “Comentarios a la ley de 25 de noviembre de 1918 sobre organización y atribuciones de los tribunales para niños”. En F. Bergamín y otros, *Tribunales Tutelares para Niños*, Madrid, Góngora, 1929, páginas 1-10.

1890 cambio su denominación, llamándose Patronato de Niños y Adolescentes Abandonados y Presos, su presidente Don Ramón Albó, tuvo mucha influencia en los Tribunales Tutelares de menores.³⁷

La finalidad de dicho patronato se encuentra tipificada en el primer artículo de sus estatutos por Lasala: “El patronato de menores abandonados y presos tiene por objeto lograr la rehabilitación moral y social de los jóvenes encarcelados y amparar y proteger a los demás contra el abandono, la miseria, los malos tratamientos y la inmoralidad”.³⁸

2.3 DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN DE MENORES DESDE EL SIGLO XIX HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES DE 1948³⁹.

En virtud a los antecedentes legislativos sobre el tratamiento de menores infractores, así como a la protección de la infancia abandonada⁴⁰, se puede afirmar que en los inicios del siglo XIX ha existido bastante actividad legislativa. Un ejemplo de ello fue la primera ley que entró en vigor el 6 de febrero de 1822, sobre la organización de la beneficencia española. Seguidamente apareció la ley de Ordenación de presidios de 1834, regulaba la separación de los infractores jóvenes y su instrucción y reforma.⁴¹

³⁷ Roca T., Ramón Albó, ha muerto, *Surgam*, 1956, páginas 481-487.

³⁸ Lasala, G., La juventud delincuente en España y sus tribunales de menores, *Surgam*, 1954, páginas 6-14.

³⁹ Para un completo estudio de esta legislación, veasé ROCA, T: Historia de la obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España, Madrid, 1968, páginas 60 y ss; Guallart Y López de Goicoechea, J: El Derecho penal de los menores. Los Tribunales para niños, página 95-76; MONTERO -RIOS y VILLEGAS, A: Antecedentes y comentarios a la ley de tribunales para niños, Madrid, 1919, páginas 20-23; LOPEZ RIOCEREZO, J.M: Delincuencia juvenil. Política recuperativa del joven delincuente, t.II, Madrid, 1960, página 69 y ss, DE COSSIO Y GOMEZ ACEBO, M: Las instituciones tutelares de la infancia abandonada, Madrid, 1907; VOLISZT, F: Tratado de derecho penal, páginas 520 y ss.

⁴⁰ El origen y evolución de nuestra legislación de menores también ha sido tratado por RIOS MARTIN, J.C: El menor infractor ante la Ley penal, páginas 89 y ss; CANTERO, R: Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: Derecho penal y procesal de menores, páginas 42 y ss; GONZALEZ ZORRILLA, C, Barcelona, 1985, páginas 113 y siguientes; SANCHEZ MARTINEZ, F: Antecedentes y nuevo enjuiciamiento de menores. Ley 4/1992, página 49 y siguientes; La obra de protección de menores, Consejo Superior de Protección de Menores, Ministerio de Justicia, Madrid, 1984, pp.23 y ss; BENITO ALONSO, F: “Los antecedentes históricos de la ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, como criterio de interpretación de la misma”, en La Ley, núm.5308, de 25 de mayo de 2001, páginas 1-10.

⁴¹ GUALLART y LOPEZ De GOICOECHEA, J: El Derecho penal de los menores. Los Tribunales para niños, página 95.

En este sentido mencionar a CONCEPCIÓN ARENAL, en su obra Estudios Penitenciarios de 1877, muestra la creación de colonias agrícolas como forma de rehabilitación social para jóvenes infractores.⁴²

Más tarde fue la ley de 26 de julio de 1878 sobre los trabajos peligrosos de los niños.⁴³ Cinco años más tarde, concretamente el 4 de enero de 1883, se estableció la organización de asilos e instituciones de protección correccional.⁴⁴

Según lo dispuesto en el Real Decreto de 11 de agosto de 1888 fueron destinados los infractores menores de veinte años al establecimiento penal de Alcalá de Henares. Este hecho no hizo que estos menores dejaran de delinquir,⁴⁵ omisión que será corregida por el Real Decreto de 17 de junio de 1901, que creó la escuela central de Reforma y Corrección Penitenciaria de Alcalá de Henares⁴⁶ para menores de veintitrés años.⁴⁷

Por otro lado, se hace mención a la Ley de 13 de marzo de 1900, la cual fijó las condiciones de trabajo tanto de las mujeres como también de los niños.⁴⁸ Posteriormente el Real Decreto de 10 de marzo de 1902, que regulaba el ingreso en la Escuela Central de Reforma y Corrección Penitenciaria de Alcalá de

⁴² MIRET MAGDALENA, E: Hacia una Ley española del menor, en jornadas de estudio de la legislación del menor, Consejo Superior de Protección de Menores, Ministerio de Justicia, 1985, página 10. Sobre los trabajos agrícolas e industriales en los asilos correccionales, véase DE COSSIO Y GOMEZ-ACEBO, M: Las instituciones tutelares de la infancia abandonada, páginas 106-108.

⁴³ ROCA, T: Historia de la obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España, página 60.

⁴⁴ GUALLART y LOPEZ GOICOECHEA, J: El Derecho penal de los menores. Los Tribunales para niños, página 95. Sobre esta Ley ha señalado RIOS MARTIN, J.C: El menor infractor ante la ley penal, página 99, que los jóvenes menores de dieciocho años que tuvieran su residencia en la provincia de Madrid y careciesen de medios lícitos de subsistencia, podían ingresar en las escuelas de reforma, a las que también tenían acceso los hijos de familia que se hallaren bajo tutela o curatela y fuesen objeto de corrección de sus padres.

⁴⁵ LOPEZ RIOCEREZO, J: Delincuencia juvenil. Política recuperativa del joven delincuente, página 78. Los principios que debían inspirar el funcionamiento de estas escuelas de reforma han sido sintetizados por LOPEZ RIOCEREZO, J: Delincuencia juvenil. Política recuperativa, página 78, en los siguientes: a) especializar o reducir el tratamiento correccional de los jóvenes solamente en aquellos cuya delincuencia fuese declarada por los Tribunales de Justicia criminal; b) limitar la edad de ingreso a los dieciocho años; c) referir todo el procedimiento educativo regimental a las preceptivas del Derecho de 18 de mayo del mismo año; d) preceptuar los casos de expulsión del reformatorio por mala conducta reiterada o inadaptabilidad manifiesta para su régimen; e) creación y formato de una sociedad de patronato que completase la labor educativa del internado”. Un completo estudio de las diferentes Escuelas de reforma en España puede verse en SALDAÑA, Q: La reforma de los jóvenes delincuentes en España, página 22-35. Para un estudio de la evolución de estas instituciones. GARCÍA VALDES, C: Los presos jóvenes. Apuntes de la España del XIX y principios del XX, Madrid, 1991.

⁴⁶ GUALLART y LOPEZ DE GOICOECHEA, J: El Derecho penal de los menores. Los Tribunales para niños, página 95, el primero en revindicar que el sistema progresivo, conocido como Machonochie o de Croffton, recibiese el nombre de Montesinos, por ser éste el primero en aplicarlo en su presidio de Valencia.

⁴⁷ COSSIO y GOMEZ-ACEBO, M: Las instituciones tutelares de la infancia abandonada, página 4.

⁴⁸ ROCA, T: Historia de la obra de Tribunales Tutelares de Menores en España, páginas 60 y 61.

Henares de los menores de quince años que, calificados según el código penal de 1870 como irresponsables.⁴⁹

El Real Decreto de 8 de agosto de 1902, relativo a reformatorio de jóvenes infractores⁵⁰; y el real Decreto de 13 de febrero de 1903, referentes a las Escuelas – asilos de Madrid.⁵¹

En cuanto a la protección de la infancia, la Ley 23 de julio de 1903 se caracteriza por eliminar la explotación de la infancia y represión de la mendicidad de los menores de dieciséis años.⁵²

Un año más tarde, por Ley de 12 de agosto de 1904⁵³, promovida inicialmente por PI y MARGAL y aprobada por TOLOSA LATOUR, se crea el Consejo Superior de Protección a la Infancia y las Juntas Provisionales y Municipales.

2.4 ANÁLISIS DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES DE 1948.

En la Ley de Tribunales Tutelares de menores, en adelante LTTM, se muestra la regulación de la Justicia de Menores de más larga duración. De este aparecen las filosofías del correccionalismo y del positivismo⁵⁴, así lo muestra en su artículo Jiménez de Usua, cuando expone en su tenor literal: “menores de dieciséis años prostituidos, licenciosos, vagos y vagabundos” (art.9). “indisciplinados menores de dieciséis años” (art 11), “en los procedimientos para corregir y proteger a menores, (...) el Tribunal no se sujetará a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones” (art. 15), “teniendo en cuenta

⁴⁹ BERNARDO DE QUIROS, C y NAVARRO DE PALENCIA, A: Teoría del Código penal, Parte general, página 24.

⁵⁰ VON LISZT, F: Tratado de Derecho penal, página 550.

⁵¹ GUALLART y LOPEZ DE GOICOECHEA, J: El Derecho penal de los menores. Los Tribunales para niños, página 96.

⁵² Código penal interpretado por el Tribunal Supremo, página 15. JIMENEZ DE USUA: Código penal reformado de 27 de octubre de 1932 y disposiciones penales de la República, página 268. CUELLO CALON, E: Criminalidad infantil y juvenil, página 103.

⁵³ Sobre esta Ley ha destacado ROCA, T: Historia de la obra de los Tribunales Tutelares de Menores e España, página 60, que se sitúan en la línea de proteger física y moralmente a los niños menores de diez años, encargándose también de la vigilia de los que habían de ser entregados a la lactancia mercenaria y de los internados en instituciones protectoras.

⁵⁴ CANTARERO BANDRES, R: Ley de Tribunales Tutelares de Menores (Texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948) y Constitución”, en ADPCP,1986, PÁGINA 113, el positivismo criminológico aportó los fundamentos teóricos para que bajo la dirección de los correccionalistas españoles viera la luz la LTTM.

la naturaleza de los expresados hechos en directa relación con las condiciones morales y sociales en que los menores las hayan ejecutado” (art.16), etc.

Según GIMENEZ-SALINAS “los resultados producidos se refleja en la realidad cotidiana donde un menor de edad penal es detenido por una serie de supuestos que, si fuera mayor de dieciséis años, posiblemente carecerían de transcendencia jurídica.”⁵⁵

La LTTM no distingue entre quienes violan la Ley penal y quienes deben ser protegidos. Así, el propio artículo 9 tipifica tanto la facultad reformadora como la protectora. Menciona en su tenor literal, concretamente en su párrafo primero “los tribunales tienen competencia para conocer: a) de las acciones u omisiones atribuidas a los menores realizadas antes de cumplir los dieciséis años, que el Código penal o las Leyes especiales califiquen como delitos o faltas, sin otra excepción que los delitos o faltas atribuidos a la jurisdicción castrense por el Código de Justicia Militar; b) las infracciones cometidas por menores de la misma edad consignadas en las Leyes provinciales y municipales; c) los casos de menores de dieciséis años prostituidos y vagabundos, siempre que a juicio del Tribunal respectivo, requieran el ejercicio de su facultad reformadora”.⁵⁶

Posteriormente, en el párrafo segundo del propio artículo 9 reconoce a estos Tribunales la competencia para reconocer las faltas cometidas por mayores de dieciséis años, comprendidas en el artículo 584 del Código Penal.

En cuanto al apartado tercero del artículo anteriormente mencionado, alude a la facultad protectora, pues los Tribunales Tutelares de Menores son competentes para proteger a los menores contra el ejercicio del derecho a la guarda o educación: a) en los casos previstos en el Código Civil por malos tratos, órdenes o consejos; b) en los consignados en los números 5,6,7,8,10,11 y 12 del artículo 584 del Código penal y en el artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1903.

El último párrafo del artículo anteriormente mencionado, hace referencia al aspecto reformador de carácter educativa y tutelar, no teniendo en cuenta u

⁵⁵ GIMENEZ -SALINAS y COLMENAR, E: Delincuencia juvenil y control social, página 32.

⁵⁶ Decreto de 11 de junio de 1948 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, B.O.E. del E, de 19 de julio de 1948.
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1948/201/A03306-03318.pdf>

obviando las faltas cometidas por mayores de dieciséis años (art. 584 CP), al que correspondía un carácter represivo. En cuanto a la facultad protectora, se le otorgaba un carácter principalmente preventivo.

Los Tribunales Tutelares de Menores, cuyo origen es el Padre de Huérfanos de Valencia, actuaban sin Fiscal, acusador, Abogado defensor, en definitiva, sin ninguna garantía para el menor. En este sentido, los jueces, actuaban más como padres que como propios juzgadores, tenían una total libertad en el procedimiento.

El artículo 17 tipifica las medidas que se aplican al menor de dieciséis años, con el objetivo reformador y protector, creándose facultades idénticas que únicamente se diferencian en su denominación. El juez podía aplicar, por un lado, la medida privativa de libertad, consistente en el corto periodo de internamiento o ingreso en un centro oficial o privado de educación, observación, de carácter educativo o correctivo o semilibertad. Otra de las medidas es el ingreso en un centro especial para menores anormales, otra fue la restrictiva de derechos, consistente en asignar la custodia del menor a otra persona, familia o de una sociedad tutelar y libertad vigilada. La última de las medidas consistía en el ejercicio de amonestar.

“En el caso de adoptarse el internamiento del menor, en un establecimiento de reforma de carácter correctivo, el propio artículo 17 exigía expresamente que los medios empleados en las demás Instituciones reformadoras auxiliares del Tribunal hubiesen resultado ineficaces por sus condiciones personales de demostración o rebeldía. Así, pues, en la adopción de las citadas medidas los Tribunales Tutelares no podían imponer otras, estando sujetos exclusivamente a las limitaciones de legalidad y última ratio del internamiento de tipo correctivo, impuestas por el propio artículo 17”.⁵⁷

Destacar la ausencia en la tipificación del artículo 17 respecto a la gravedad del hecho típico cometido por el menor, por lo contrario, si tiene en cuenta, dicho

⁵⁷ Ventas, Sastre, Rosa; *La minoría de edad penal*, Universidad Complutense de Madrid, 2006. ProQuest Ebook Central. Recuperado de: <https://search.proquest.com/legacydocview/EBC/3169927?accountid=139267>.

artículo, las necesidades educativas del menor.⁵⁸ Siendo este último criterio aparentemente bastante objetivo y no permitiendo una valoración exacta de las necesidades del menor para su reinserción. En este sentido, hay que tener en cuenta la nula atención que se proporcionaba a las Ciencias psicológicas y psiquiátricas. Este hecho generaba inseguridad jurídica, debido a la falta de tipificación en cuanto a la duración de las medidas, que eran de carácter indeterminado.⁵⁹

Finalmente, a la hora de decidir las medidas a imponer por parte el juez tutelar, (art. 17), el Juez basaba su criterio de imposición de medidas en buscar el bien común en el menor una vez ejecutadas, sin tener en cuenta estudios sobre la situación psicológica del menor (art. 16), así como la duración indeterminada de las medidas a imponer, o el carácter penitenciario de los centros de internamiento. Este hecho muestra una aparente actuación por parte de los Tribunales Tutelares de Menores insostenible o nefasta.

Así pues, el Texto refundido de 1948 se caracterizaba: por un lado, la creación de un Tribunal Tutelar de Menores en cada capital de provincia; Vicepresidente, dos vocales propietarios y dos suplentes, además de los Jueces unipersonales de Madrid (no tenían por qué ser de la carrera judicial), pero sí que se requería o exigía tener una serie de características, como son: ser mayor de veinticinco años, tener una vida familiar intachable, han de ser elegidos en el territorio donde residen y donde ejercerán su jurisdicción.⁶⁰

De lo anteriormente expuesto se puede intuir la insuficiencia para atender o hacer frente a las exigencias de hoy día y a las de entonces.

III. REGULACIÓN PENAL

⁵⁸ OCTAVIO DE TOLEDO y UBIETO, E: Derecho penal. Parte general, páginas 356 y 357.

⁵⁹ En la actualidad la aplicación de una medida de seguridad por tiempo indeterminado puede herir la sensibilidad jurídica de los penalistas contemporáneos, a principios del siglo XX, en cambio, la gran mayoría de los autores, inspirados en el principio correccionalista y en el deseo de enmendar la duración de las medidas. A título de ejemplo, señala VALDES RUBIO, J.M: Derecho penal. Su Filosofía, Historia, Legislación y Jurisprudencia, página 97, que “confiando más aún que en justicia de los Tribunales para jóvenes en la discreción de aquéllos, debe dejarse a su prudente arbitrio la terminación de la pena, siendo de suficiente duración para obtener la reforma moral del joven (...).

⁶⁰ MARTIN OSTOS, J; Jurisdicción de menores, página 85.

3.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

A continuación, se realizará un análisis histórico de la responsabilidad penal de los menores en las principales legislaciones que nos han precedido y, de algún modo ha establecido un Derecho Penal dedicado exclusivamente a los menores.

Son muy pocas las fuentes jurídicas que han determinado la edad de responsabilidad penal, ello es causa de que en las civilizaciones más antiguas no existía el Derecho Penal, en cambio sí que existía un sistema de reacciones contra ciertos comportamientos basados en los usos y costumbres. En este sistema la responsabilidad penal se aplicaba a los sujetos, independientemente de su edad, pudiendo reclamarse cualquier acto ilícito, no teniéndose en cuenta otras circunstancias tales como la culpa, el caso fortuito, la minoría de edad, etc. Este fue el hecho por el que los menores fueron imputados por el propio sistema de responsabilidad que los adultos hasta el siglo XVII. La legislación sería de aplicación dependiendo de la propia norma de cada época y pueblo. Ya en el siglo XIX, cuando se implantó la minoría de edad como atenuante de la responsabilidad.⁶¹

Por todo lo mencionado anteriormente, se puede deducir la necesidad de la existencia en nuestra sociedad de un derecho penal, por un lado, para adultos y por otro para menores, en este último caso debiendo estar limitado a una intervención muy especializada y racional, no evitando la penalización del menor, sino que, de forma más severa, los menores sean los que padezcan en primera persona los reproches sociales que afecten positivamente a su personalidad.⁶²

A continuación, se irán explicando y desarrollando los aspectos más importantes de cada época en relación con la responsabilidad penal de menores, comenzando por la escasez de fuentes de las primeras civilizaciones, hasta la regulación actual en el Código Penal español. El objetivo es determinar una evolución de la sociedad, alcanzando una concepción del menor como un ser humano con derechos y su propia autonomía, el cual no debe ser penado como

⁶¹ GRANADO PACHÓN, S.J., *El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento- penal actual*, Tesis defendida en la universidad de Huelva, 2016, p.1-2.

⁶² SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F, *La jurisdicción de menores en España (presente, pasado y futuro)*, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 1996, p23-25.

un adulto, sino según sus circunstancias personales y gozando de una protección especial.

3.1.1 NORMATIVA ANTERIOR AL ESTADO DE DERECHO

Comenzando por las civilizaciones primitivas, hasta llegar a la elaboración de los primeros textos, el derecho o las reglas de la sociedad eran reguladas conforme a los usos y costumbres del lugar. Es en este periodo histórico en el que el padre imponía decisiones a sus hijos. Con la mirada puesta en la sociedad, esta percibía al padre como aquel que tenía facultades ilimitadas sobre el menor, siendo este último, un objeto por su debilidad y escasa utilidad social.⁶³

En esta misma etapa histórica, surgió en Babilonia el Código de Hammurabi, concretamente en el año 1750, antes de cristo, cuyo objetivo era establecer cierta igualdad entre sus súbditos, pero el sistema patriarcal seguía primando, sin embargo, el padre perdió el derecho a decidir sobre la vida o la muerte de sus súbditos. De este texto cabe destacar la Ley del Talión⁶⁴, coloquialmente conocida como “ojo por ojo, y diente por diente”, esta regla también se aplicaba a los menores, aunque de manera de una forma más contundente en edades muy tempranas.

También cabe destacar que, más adelante, en el siglo XII, las Leyes ASIRIAS Medias⁶⁵ ya tipificaban diferencias en asuntos civiles respecto a la edad penal.⁶⁶

Si retrocedemos a la época prerromana, las fuentes de derecho fueron muy escasas, solo se aplicaba a la justicia doméstica. Las primeras disposiciones punitivas fueron las del legislador Dracón, estas trataban por igual a los mayores que los menores de edad a la hora de aplicar las penas, siendo por ello que los menores estaban tratados con gran crueldad.

⁶³ GRANADO PACHÓN, S.J, El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual, p.18-21.

⁶⁴ La Ley del Talión hace referencia a un principio de justicia retributiva o recíproca donde la norma imponía un castigo que se identificaba con el delito cometido. De este modo, n se habla de un apena equivalente, sino de un apena idéntica.

⁶⁵ Leyes Asirias Medias del siglo XII (Disponibles en: <https://www.unizar.es/hant/Fuentes/leyasiria.hym>); última consulta agosto 2020.

⁶⁶ La Tablilla A, VI, 19-39 establecía los 10 años, como plena capacidad, para contraer matrimonial, posiblemente con base en un criterio de fertilidad.

Platón y Aristóteles defendían ya en este periodo histórico que la minoría de edad era una situación psíquica especial que disminuía la culpabilidad, aunque no la eximía.⁶⁷

Por el contrario, en Roma, la legislación fue más precisa, la Ley de las XII Tablas de 450 antes de Cristo⁶⁸ ya establecía los límites adecuados al tipo de delito⁶⁹. Añadir, pues esta fue la primera que distinguió tres estadios de responsabilidad: el Infant (menores de 7 años) carecía de capacidad de obrar y penal; el impúber (de 7 a 9 años y medio en mujeres o 10 años y medio en hombres) el cuál sería penado si había obrado con discernimiento; y el Minor (de 14 a 25 años) que tenía plena capacidad penal pero siempre atenuada.

Finalmente, Grecia y Roma, dejaron atrás la justicia doméstica, ya los hijos no eran propiedad de los padres, logrando una flexibilización de los castigos.⁷⁰

Centrándonos en España, el sistema punitivo compuesto por normas y costumbres, pero sin ningún razonamiento científico. Llegada la época medieval comienza a aparecer el interés por la protección de los niños y la regulación del derecho paterno. Los Reyes Cristianos en la reconquista, les ofrecieron leyes particulares a los pueblos permitiéndoles regular a su interés.

Este hecho generó una gran controversia, consistente en que cada pueblo tenía sus propias normas causando una gran confusión generando diferentes regulaciones sobre una misma materia entre los diferentes pueblos.

Centrándonos en la materia de responsabilidad penal del menor, estas regulaciones no dejan de mostrar la importancia de aquella época en el derecho patriarcal, un ejemplo de ello fue el Fuero de Calatayud, el cual reconocía al padre la potestad de matar a sus propios hijos, el de Navarra la de mutiladores y el de Plasencia la de arrestarlos. Por el contrario, *también existían los que declaraban la responsabilidad modificada del menor en caso de que*

⁶⁷ CÁMARA ARROYO, S, Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, Tesis defendida en la Universidad de Alcalá de Henares, 2011, p. 37-42.

⁶⁸ Las XII Tablas del siglo V, (Recuperado de: http://ermoquisbert.tripod.com/dr/12t/12t_apunte.pdf; última consulta: agosto 2020).

⁶⁹ Mientras la pena capital se imponía al púber por la usurpación de pastos, al menor se le atenuaría en azotes o en la reparación del daño.

⁷⁰ CÁMARA ARROYO, S, Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, 2011, p.44-47.

*concurriesen circunstancias modificativas como fue el Fuero de Salamanca y el de Teruel que tipificaban prisión por deudas para menores de 12 años, pero por la atenuación del uso de cadenas en lugar de cepos, cormas o esposas; o el Fuero de Ledesma que señalaba que los menores de 9 años debían reparar el daño con 5 sueldos, mientras que los mayores de 9 años se les duplicaba. De acuerdo a la edad límite, el Fuero de Brihuega establecía los 10 años como comienzo de la responsabilidad penal, el de Abad de Oñas los 7 años, el de San Miguel de Escalada lo hacía en base al cambio de dientes y el Libro de los Fueros de Castilla en los 12 años.*⁷¹

Ante esta situación especialmente impactante y caótica, fueron muchos los que intentaron unificar la normativa, así Alfonso X, promulgó el Fuero Real de 1255⁷², en este se pudo encontrar un sistema de individualización por el cual los padres no podrían ser penados por delitos cometidos por sus propios hijos.

En el periodo comprendido entre los años 1256-1265⁷³, aparecen las llamadas Partidas de Alfonso X, contenían todo lo relativo a la responsabilidad penal de los menores, señalando algunas excepciones para los menores de 14 años en hombres y 12 en mujeres, concretamente en delitos de lujuria⁷⁴, así como para menores de 10 años y medio en el resto de los delitos⁷⁵. Se entendía en esta época que los niños con edades por debajo de las anteriormente mencionadas no tenían capacidad de dolo, salvo que el juez dictara lo contrario e impusiese un castigo, y que, en los casos de delitos de lujuria, el menor actuara más por instinto que por inteligencia. En el caso de los mayores de 10 años y medio y los menores de 17 años⁷⁶, o 25 años en la práctica, el juez solía atenuar la pena, a pesar de no existir precepto legal que lo estableciera.⁷⁷ Ahora bien, en este

⁷¹ CÁMARA ARROYO, S, Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, p. 62-63.

⁷² Fuero Real de 1255, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/opusculosLegalesT2.pdf>; última consulta: agosto 2020).

⁷³ Las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio, (Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-siete-partidas-del-rey-don-alfonso-el-sabio-cotejadas-con-varios-codices-antiguos-por-la-real-academia-de-la-historia-tomo-3-partida-quarta-quinta-sexta-y-septima-0/html/01fb8a30-82b2-11df-acc7-002185ce6064_723.htm, última consulta: agosto 2020).

⁷⁴ Partida Séptima, Título I, Ley 9.

⁷⁵ Partida Primera, Título 10, Ley 21.

⁷⁶ Partida SÉPTIMA, TÍTULO 31, Ley 8.

⁷⁷ VENTAS SASTRE, R, La Minoría de Edad Penal, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 2002, p 5-7.

mismo enfoque o sentido, el Libro de las Costumbres De Tortosa de 1279⁷⁸ que entiende e interpreta la edad como una circunstancia modificativa de la responsabilidad, desde los 10 años y medio hasta los 14, siendo en este último caso la tenencia de una responsabilidad absoluta. En algunas ocasiones, aunque siendo en una minoría se aplicaba también este texto a los menores de 25 años, teniendo en cuenta que su capacidad jurídica se adquiría tras dicha edad.⁷⁹

Ya en el siglo XIV, Alfonso XI tomó algunos preceptos establecidos por Alfonso X. Además, en el Ordenamiento de las Leyes de Alcalá de Henares de 1348⁸⁰ ya se tipificó la eximente de responsabilidad penal de 14 años para el delito de lujuria en varones y de 12 años en mujeres. Consecuentemente, en las Ordenanzas Reales de Castilla, concretamente entre los años 1385- 1490⁸¹, los Reyes Católicos no tuvieron en cuenta a los menores de 12 años de las penas impuestas a los vagos. Posteriormente en las Leyes de Toro de 1505⁸², con un contenido muy similar al anterior.⁸³

La situación histórica de aquella época intentaba calmar las reivindicaciones de justicia que carecían de racionalidad y de proporcionalidad. La característica principal del sistema jurídico penal en los siglos XVI-XVIII era la arbitrariedad de los jueces debido a que la interpretación judicial era muy controvertida e interpretable. Por el contrario, los procedimientos más crueles contra menores eran castigados por la Inquisición, estos no respetaban la edad límite establecida en las normas, considerando a los menores de 6 o 7 años capaces de delinquir.

⁷⁸ Código de las Costumbres escritas de Tortosa de 1279, (Recuperado de: http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000348216_V03/4#HEAD; última consulta: agosto 2020).

⁷⁹ CAMARA ARROYO, S, Derecho Penal de Menores y Centro de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, p.64.

⁸⁰ Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. (Recuperado de: <http://fama2.us.es/fde/ocr/2004/ordenamientoDeAlcala.pdf>; última consulta: agosto 2020).

⁸¹ Ordenanzas del Consejo Real de Castilla de 1385-1490, (Recuperado de: <http://institucional.us.es/revistas/historia/07/07%20de%20dios.pdf>; última consulta: agosto 2020).

⁸² Leyes de Toro de 1505, (Recuperado de: http://faculty.georgetown.edu/sallesrv/courses/SPAN-459/span459/pdfs/leyes_toro/leyes_96.pdf; última consulta: agosto 2020).

⁸³ CAMARA ARROYO, S, Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, p.75-76.

En este sentido, si en el hecho existía intención de dolo, se aplicaban las penas ordinarias a los hombres mayores de 14 años y mujeres mayores de 12 años.⁸⁴

De todo lo mencionado anteriormente se puede deducir la existencia de una Justicia Penal obsoleta y bacia con respecto a las necesidades penales y sociales y consecuentemente necesitando y requiriendo de una Ley que lo tipificara.⁸⁵

En esta época aparecen normas que ofrecen a los menores un tratamiento jurídico diferente que a los adultos, imponiéndoles sanciones más leves ante el mismo delito. La Pragmática de 3 de mayo de 1586 de Felipe II ordenaba la pena de 6 años de galeras a los ladrones de entre 17 y 20 años, esto fue endurecido por la Pragmática de 23 de febrero de 1734 de Felipe V, la cual no llegó a aplicarse, esta imponía la pena de muerte a los mayores de 17 años que hubieran robado a la Corte, atenuándose para los mayores de 15 y menores de 17, imponiéndoles un castigo de 200 azotes y 10 años de galeras. Cabe destacar, la Pragmática de 12 de marzo de 1771 de Carlos III que reconocía, por primera vez, un tratamiento educativo a los menores con el fin de conseguir su reintegración dándoles la oportunidad de trabajar en los presidios con el fin de alejarlos de la criminalidad y por último la Pragmática- sanción de 19 de Septiembre de 1783 que contenía las reglas para castigar la vagancia, añadir, que estipulaba que el menor de 16 años era inimputable y en caso de ser menor de 17 años, respondían los padres o tutores.⁸⁶

Según todo lo expuesto anteriormente, se puede deducir la inexistencia de una regulación en cuanto al límite de edad en relación a la responsabilidad penal, manteniéndose el de 17 a 20 años y como tope mínimo, los 10 años y medio.

Posteriormente, Carlos III comenzó a adoptar medidas protectoras cuya finalidad era la educación, incentivando a los padres a educar a sus hijos y enseñarles un oficio, en caso de que los menores estuviesen incapacitados, los destinaban a

⁸⁴ GRANADO PACHÓN, S.J, El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico- penal actual, p. 73-75.

⁸⁵ VENTAS SASTRE, R, La Minoría de Edad Penal, p. 9 y 12.

⁸⁶ VIDAL HERRERO, M.S. crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/200, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores hacia un “modelo social de responsabilidad” del menor infractor, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 2015. P. 56-62.

hospicios o casas de misericordia. Esto permitió que los menores escaparan del reclutamiento militar y reemplazar la pena de muerte por la privación de libertad, en algunas ocasiones se aplicaba de forma ilimitada para llegar a corregir al menor.⁸⁷

Es de gran relevancia, la fijación e tres tramos de edad respecto a la responsabilidad penal: *irresponsabilidad penal absoluta hasta los 7, 9, o 10 años, dependiendo del ordenamiento jurídico; desde las edades anteriormente mencionadas hasta los 14,15 o 16 años, inimputabilidad si se probaba que no había actuado con discernimiento; y responsabilidad penal atenuada desde las edades anteriores a los 18 años.*⁸⁸ Carlos III logró la consecución de grandes logros, no fue hasta el Código Penal de 1822 cuando tuvo lugar, en España, una norma relativa a menores infractores.⁸⁹

Ya entre los siglos XVIII y XIX, se produjo un movimiento de urgente reforma. Se establecieron los principios que acabarían con el régimen jurídico anterior del menor, además hizo surgir la Codificación en España y el Derecho Penal. En este sentido, ROUSSEAU defendió el valor absoluto de los niños en cuanto a su personalidad.⁹⁰

A finales del siglo XIX, aparecieron en Europa los primeros sistemas tutelares, de protección y asistencia, estos tenían unos objetivos consistentes en sustituir las penas por medidas educadoras, en el que el contacto entre el menor y los procesos judiciales fueran mínimos, y su ingreso en prisión quedara sustituido por la corrección familiar o pública. Pero esto no era la realidad, pues los menores eran encarcelados en prisiones junto a adultos.⁹¹

3.1.2 DERECHO POSITIVO ESPAÑOL EN EL ESTADO DE DERECHO

En el siglo XIX se crearon en España sucesivos Códigos Penales, caracterizado por pertenecer a la doctrina clásica del Derecho, al principio retribucionista,

⁸⁷ GRANADO PACHÓN, S.J. El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual, p.85-86.

⁸⁸ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F, La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro), p. 39.

⁸⁹ VENTAS SASTRE, R, La Minoría de Edad Penal, p. 19-21.

⁹⁰ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F, La jurisdicción de menores en España (pasado, presente y futuro), p. 39.

⁹¹ CÁMARA ARROYO, S, Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una perspectiva Penitenciaria, p. 291-292.

impidiendo diferenciar al adulto infractor del menor. En este periodo solo se aplicó el criterio biológico, no siendo hasta el CP de 1928 cuando se dejan de aplicar las penas retributivas, para centrarse en el aspecto biológico, imponiéndose medidas.⁹²

Un siglo a estacar fue el siglo XX, pues comienza a investigarse y estudiar la infancia y adolescencia infractora desde un punto de vista social y protector, permitiendo una sustitución del criterio.⁹³

3.1.2.1 CÓDIGOS PENALES DEL SIGLO XIX Y EL CRITERIO DE DISCERNIMIENTO

En los CP del siglo XIX se establecieron varios criterios en relación a la edad, en primer lugar, la presunción iuris et de iure, en una edad temprana no admitiendo prueba en contrario, es por ello que los menores de edad no podían delinquir; en segundo lugar, la presunción iuris tantum, se aplicaba a una edad no temprana.

En el año 1822⁹⁴ aparece el primer CP Español resultado de una tradición y un proceso al abandono de las antiguas y estrictas Leyes penales debido a los cambios sociales y políticos.

Comenzando por la presunción iuris et de iure para determinar que el menor de 7 años estaba exento de responsabilidad ya que se entendía no poseer la capacidad o voluntad de cometer un acto criminal⁹⁵ y, por otro lado, una presunción iuris tantum, si la actuación fue con malicia. El juez estaba legitimado para imponerle una medida, como por ejemplo el sometimiento a la corrección de sus familiares o de casas de corrección por el tiempo que fuera conveniente, siempre que no exceda de los 20 años el menor (art. 24). Si, en sentido contrario, obró con discernimiento y malicia se le aplicaba una pena atenuada de la cuarta parte a la mitad de la pena ordinaria (art. 25), no pudiendo ser la pena de muerte, trabajos perpetuos, deportación, presidio, obras públicas, infamia o destierro

⁹² GRANADO PACHÓN, S.J. El menor infractor: evolución jurídica y mitos el tratamiento jurídico-penal actual, p.87-88.

⁹³ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 25-27.

⁹⁴ Código Penal español de 1822, (Disponible en: <http://www.cienciaspenales.net/files/2016/03codigoPenal1822.pdf>; última consulta: agosto 2020).

⁹⁵ CÁMARA ARROYO, S; Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, p. 221.

(arts. 64 y 65). Finalmente, para los sujetos mayores de 17 años, existía una plena responsabilidad.⁹⁶

El CP anteriormente mencionado se caracterizó por numerosas aprobaciones y derogaciones políticas, este hecho causó su desaparición, aunque destacaron las siguientes corrientes que influenciaron esta situación política. La reacción absolutista, tuvo la necesidad de crear un nuevo código, sin embargo, ninguno de los Proyectos de 1830, 1831 y 1834 siguientes fueron eficaces, pues no regulaba el discernimiento, sino que únicamente se hizo referencia a los 10 años y medio como límite eximente de responsabilidad⁹⁷ y también dispusieron algunas atenuaciones.⁹⁸

No fue hasta 1848⁹⁹, cuando se crea el primer texto punitivo, retrocediendo a los Fueros y las Partidas. Se consideraba en esta época a los menores de 9 años irresponsables penalmente, entendiendo que estos eran locos o dementes mediante la presunción iuris et de iure y otorgaba el juicio del discernimiento a los mayores de 9 y los menores de 15 años, estableciendo que, en caso de existir discernimiento, se aplicaría una pena inferior en dos grados, si no se estimaba discernimiento, se consideraba al menor irresponsable (art. 8).

En este sentido, pasados unos años se introdujo un periodo de responsabilidad atenuada desde los 15 a los 18 años, resultando la aplicación de la pena inmediatamente inferior a la correspondiente, impidiendo en todo caso, imponer la pena de muerte a un menor de 18 años (art.9). Por este motivo, a partir de los 18 años, el menor era plenamente responsable. El CP, no reguló los supuestos en los que la familia no tenía medios para educar a sus hijos.¹⁰⁰

⁹⁶ GRANADO PACHÓN, S.J; El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento-penal actual, p. 89-91.

⁹⁷ Artículo 35 del Proyecto de 1830 y Artículo 4 del Proyecto de 1831 y Artículo 15 del Proyecto de 1834.

⁹⁸ Artículo 118 y 119 del Proyecto de 1831 y Artículo 31 del Proyecto de 1834.

⁹⁹ Código Penal español de 1848, (Disponible en: <http://fama2.us.es/fde/codigoPenal1848.pdf> ; última consulta: agosto 2020).

¹⁰⁰ GRANADO PACHÓN, S.J, El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento-penal actual, p. 91-93.

La ausencia en la regulación de la adecuación entre la Constitución liberal de 1869¹⁰¹ y el CP hizo necesario una reforma. Surgiendo el CP de 1870¹⁰², del cual cabe señalar que eliminó las penas para los menores, por lo que se conoció como “El Código de las libertades”. Respecto a la edad penal, mantenía los mismos tramos que el CP anterior, pero, preveía la entrega del menor a su familia con el objetivo de su corrección y educación, o en caso de ser un niño con alguna deficiencia psíquica o física, introducirlo en un centro especializado.¹⁰³ Respecto a las medidas, no podía en ningún caso el juez establecerlas, únicamente pudo regularlas, por tiempo determinado, aunque siguió existiendo cierta arbitrariedad.¹⁰⁴

Más tarde, surgieron los proyectos de 1880, de 1882 y de 1884 que pretendían una mejora y simplificación del sistema de penas, consiguiendo adaptarlo a la Constitución de 1876¹⁰⁵. El primero de ellos regulado en los artículos 8.3 y 9.2 de la misma forma que el CP de 1870; el segundo, en el artículo 17.2 y 3, dispuso la eximente siguiendo el CP de 1848, mientras que el art. 18.2 innovó en atenuantes elevando a 20 años el máximo de minoría de edad, y, el tercero tipificó las eximentes en el art. 31.4 y 5, las atenuantes en el art. 33.2 y mantuvo el límite de exclusión de responsabilidad como el CP de 1848, aunque impuso el criterio del discernimiento para mayores de 9 y menores de 15 años dejando al arbitrio el juez la determinación del internamiento.¹⁰⁶

3.1.2.2 CÓDIGOS PENALES DEL SIGLO XX Y EL CRITERIO CRONOLÓGICO O BIOLÓGICO

El aspecto del discernimiento generó una gran inseguridad jurídica como consecuencia de la complejidad de tal concepto, dando lugar a diferentes interpretaciones impidiendo una uniformidad. El estudio de este criterio requería profundizar en la realidad psíquica del menor. Este estudio no tuvo ningún futuro,

¹⁰¹ Constitución democrática española de 1869, (Disponible en: <http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1869.pdf?sfvrsn=4>; última consulta: agosto 2020).

¹⁰² Código penal español de 1870 (Disponible en: https://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigo_penal/index.htm ; última consulta: agosto 2020).

¹⁰³ Artículos 8, 9.2 y 86.2.

¹⁰⁴ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 89-90.

¹⁰⁵ Constitución española de 1876, (Disponible en: [Http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1876.pdf?sfvrsn=4](http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1876.pdf?sfvrsn=4); última consulta: agosto 2020).

¹⁰⁶ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 98-105.

ya que fue eliminado por las críticas de la doctrina científica y el Derecho Penal de menores.

Ya en el siglo XX se eliminó el criterio del discernimiento siendo sustituido por el criterio biológico o cronológico, el cual se regía por una edad fija.

El Proyecto de 1927 fue la primera regulación de este siglo, pero aún no tipificó la minoría de edad, lo que fue subsanado, incluyendo entre los arts.55 y 56 un precepto en el que se fijó que sería irresponsable el menor de 16 años que no obro con discernimiento.¹⁰⁷ En 1928 se creó el primer CP donde se tipificó que los menores de 9 años estaban exentos de responsabilidad penal, debiendo ser entregados a su familia para que fueran educados. Añadir que estaban exentos los menores de 9 años Y menores de 16 siempre que no hubieran obrado con discernimiento, siendo el Juez quien debía decidir si castigarles con penas, , o declararles irresponsables, en caso de apreciarse o no apreciarse.¹⁰⁸

Atendiendo al criterio atenuante determinaba que al mayor de 16 y menor de 18 años se le podía imponer la pena inferior en uno o dos grados (art. 65).¹⁰⁹

El Código anteriormente mencionado, supuso grandes avances, sobre todo la elevación a 1 año la edad penal.

El cambio histórico consistente en la vuelta a la República creó la elaboración del CP de 1932¹¹⁰, el cual incorporaba la coerción de la Constitución republicana y suprimiendo las incompatibilidades. Se mantenía el artículo 8.2 (exención de responsabilidad en 16 años), y el art. 9.2 (atenuante en uno o dos grados para los menores comprendidos en edades entre los 16 y 18 años). Es importante destacar este texto legal, pues finaliza con el sistema de discernimiento e imponía los 16 años como límite de la minoría de edad penal, en la que se excluía toda responsabilidad. Por otro lado, los mayores de 16 años se consideraban

¹⁰⁷ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p.138-140.

¹⁰⁸ DE LA ROSA GTIÉRREZ, G; “Imputabilidad y edad penal”, en BuscaLegis, 2007, p.11.

¹⁰⁹ CAMPOS SÁNCHEZ, M; “Incidencia del nuevo Código Penal en la legislación de menores”, en Revista Jurídica de la Región de Murcia, 24, 2997, p. 99.

¹¹⁰ Código Penal español de 1932, (Disponible en: <https://es.scribd.com/document/235086176/Codigo-penal-1932-pdf>;últim consulta: agosto 2020

responsables penalmente. Se eliminó la pena de muerte en cualquier supuesto.¹¹¹

Respecto a las sanciones, los competentes y legitimados para imponer medidas eran los Tribunales, no teniendo en cuenta la concepción retributiva. Tras la Segunda Guerra Mundial, se generó en este periodo la implantación de un modelo de bienestar, con unos objetivos marcados consistentes en el aspecto sociológico y reeducador de los propios menores infractores, introduciendo sistemas de mediación, compensación e incluso de reparación del daño, y declarando la aplicación de la pena de internamiento solo en los casos más graves.¹¹²

El CP de 1944 ya sustituyó al CP de 1932, este texto legal estaba influenciado por el Gobierno franquista. Este Código supuso una mayor severidad, llegando a reintroducir la pena de muerte. Pero debe mencionar o hacer especial mención a que ya este código respetaba a los menores, imponiéndoles medidas y no penas, además se mantuvo el límite de exención de 16 años del art. 8.2 y la responsabilidad atenuada a los menores de entre 16 y 18.¹¹³

La incorporación del aspecto biológico hizo que el no haber cumplido los 16 años se le excluyera de responsabilidad criminal. Este hecho no implicaba que el infractor padeciera el sufrimiento de las consecuencias del delito, sino que éstas tendrían como objetivo la educación y la inserción social.¹¹⁴

En este sentido, el CP de 1973¹¹⁵, mantuvo el criterio cronológico, pues el menor de 16 años era inimputable y carecía de toda responsabilidad penal (art. 8).¹¹⁶ Este texto legal diferenciaba las mismas fases de responsabilidad penal: por un lado, los menores de 16 años, estaban exentos de toda responsabilidad penal; por otro lado, los mayores de 16 a 18 años considerados imputables, pero con atenuantes en uno o dos grados de la pena y un internamiento en institución de

¹¹¹ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 149-159.

¹¹² CÁMARA ARROYO, S; Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, p. 398-400.

¹¹³ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 197-200.

¹¹⁴ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F; La jurisdicción en España (pasado, presente y futuro) p. 189-195.

¹¹⁵ Código Penal español de 1973, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1715>; última consulta: agosto 2020).

¹¹⁶ JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2015, p.17-19.

reforma por tiempo indeterminado hasta alcanzar la corrección¹¹⁷; además, la de los mayores de 18 años que contaban con plena capacidad penal.¹¹⁸

La promulgación de la CE de 1978, abrió la vía hacia una monarquía constitucional democrática. Ello creó la elaboración de diversas reformas penales con el objetivo de lograr una adaptación a las exigencias del nuevo régimen. La CE, compiló por primera vez en España, en un texto constitucional, reconociendo los derechos y libertades del niño, protegiéndole como persona y sujeto de derechos, así como reconociéndole ciertas garantías educativas. Añadió este texto legal, los principios de prevención especial y de legalidad, como fin de las medidas la reeducación y reinserción social y abolió la pena de muerte.

Además, este texto legal amplía su competencia, de forma que los arts. 10.2 y 39.4 señalan que dicha regulación se interpretará conforme a las normas y acuerdos internacionales, los cuales son: *la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959, el Convenio Internacional de la Hay de 1961 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, sin olvidarnos que este último texto ha sido desarrollado en otros tres instrumentos, las Reglas de Beijing de 1985, las Directrices de Riad de 1990 y las Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1990.*¹¹⁹

Consecuencia de todo lo mencionado anteriormente, en 1980 se decretó un Proyecto novedoso, que aminoró la edad de exención a 15 años, acogiéndose a que la capacidad psíquica se adquiriera antes. Añadir según lo establecido como atenuantes que entre los 15 y 18 años se aplicaría la pena inferior en grado teniendo en cuenta las circunstancias del menor y del delito (arts. 27.3 y 80) y se podría sustituir la pena de prisión impuesta al mayor de 15 años y menor de 21 por el internamiento de un centro hasta conseguir su corrección, pero sin poder exceder de 10 años (art. 148). Pasados tres años, se elaboró el Proyecto de

¹¹⁷ Artículo 9.3 y 65

¹¹⁸ CÁMARA ARROYO, S; Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, p. 410-413.

¹¹⁹ GRANADO PACHÓN, S.J; El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico-penal actual, p. 215, 298 y 419.

1983, en este mismo proyecto, específicamente en el art. 22 se elevaba la edad a los 18 años, pero no especificó un tramo determinado de edades. Se cree que este hecho fue causa de la intención de promulgar una Ley que regulase la responsabilidad penal del menor como así lo determinaba la Disposición Final Segunda, siendo el primer intento de elaborar un Derecho Penal de menores. Se incluía además en el art. 99, al infractor mayor de 18 años y menor de 21, en el que el Tribunal podría sustituirle la pena de prisión por el internamiento en un centro de reeducación por un tiempo no superior a la pena, sin que pueda exceder de 4 años (art. 87.2). Posteriormente, en el año 1992 se creó otro Proyecto que establecía como personas irresponsables a los menores de 16 años (art 19.3) y tipificaba la atenuante por ser menor de 18 años (art 20.3).¹²⁰

Consecuentemente en el 1994, se creó otro Proyecto que curiosamente no entró en vigor por no apreciar el art. 20 que establecía, de forma previa a la elevación de la edad penal a 18 años, que se aprobase una Ley especial. Seguidamente, este Proyecto se convirtió en el vigente CP de 1995¹²¹, un texto punitivo, que es consecuencia de todas las reformas. El cual reconoce al menor responsable de sus actos, pero no aplicándole un Derecho Penal de adultos, sino uno específico. Se supera con ello el pensamiento del menor como incapaz o ser inferior. El Código anteriormente mencionado, se centra en el criterio biológico para declarar la imputabilidad, señalando un límite fijo de edad a partir del cual se considerará la responsabilidad penal, y por debajo del cual no existe responsabilidad alguna.¹²²

En las ya mencionadas épocas históricas se creó normativa competencial y procedimental como la Ley de Tribunales de Menores de 11 de junio de 1948.¹²³ Pero, sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991 de 14 de febrero declaró inconstitucional el art. 15¹²⁴ de la Ley de Tribunales Tutelares y Menores de 1948 por no respetar los principios fundamentales y

¹²⁰ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 173-191, 191-197 y 207.

¹²¹ Código Penal de 1995: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>; última consulta: agosto 2020).

¹²² DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G; “Imputabilidad y edad penal”, p.12-13.

¹²³ La Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948 únicamente reguló el procedimiento y las medidas a adoptar en materia de delitos y faltas cometidos por menores de 16 años.

¹²⁴ Dicho precepto regulaba el procedimiento de corrección y de reforma de menores, y señalaba que, en el procedimiento de corrección, las sesiones que los Tribunales Tutelares celebren no serán públicas y no se sujetará a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones.

constitucionales. Consecuencia de este hecho se dictó la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores¹²⁵, precedente de la Ley actual en dicha materia.¹²⁶

Según el erudito CANTARERO, en el año 1995, en su obra “Los menores y el Derecho Penal”, hizo un pequeño análisis, tanto en la Ley Orgánica 4/1992 como del Proyecto de Código Penal de 1994 y el Anteproyecto de Ley Penal Juvenil y del Menor. Consecuencia de dicha investigación, se consideró que el tratamiento exclusivamente penal y retribucionista de los menores, era incongruente en cuanto a los principios constitucionales, pero una inimputabilidad absoluta supondría justificar los comportamientos delictivos.

Este pensamiento consecuencia del análisis que realizó le llevó a pensar o adquirir una posición a favor o en defensa de la conciliación en una legislación de justicia penal y un derecho reeducativo de menores, partiendo de presupuestos jurídico-penales y procesales acordes al Derecho Penal y Procesal más avanzado en derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.¹²⁷

3.2 LA MODIFICACIÓN DEL LÍMITE MÍNIMO DE EDAD PENAL. EL MENOR INFRACITOR COMO SUJETO RESPONSABLE EN LA ACTUALIDAD

Con anterioridad a la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, los menores de 16 años estaban exentos de responsabilidad penal. Así lo disponía el párrafo 2º del artículo 8 del código Penal de 1973. El contenido del mismo estuvo vigente hasta la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero.

La entrada en vigor de la Ley 5/2000 de 12 de enero, estableció el límite mínimo de edad penal reduciéndose a los 14 años, así mismo lo establece el art. 1,1º de la LORPM, alegando dicha ley que las infracciones cometidas por los niños menores de estas edad son, en general, irrelevantes, y que por tanto, son

¹²⁵ Esta Ley apostó por la protección y educación del menor, de carácter tutelar, pasando de un modelo paternalista, a uno más garantista. De ella se deduce que los menores de 12 años son irresponsables absolutamente, mientras que los infractores de 16 a 18 años eran responsables de acuerdo con la legislación penal de los menores.

¹²⁶ BLANCO BAREA, J. A; “Responsabilidad Penal del Menor: principios y medidas jurídicas aplicables en el Derecho Penal español”, Revista de Estudios Jurídicos, 8, 2008, p.1.

¹²⁷ CANTARERO, R; “LOS MENORES Y EL Derecho Penal”, en Derecho Privado y Constitución, 7, 1995, p.16,18, 20-22y 29-30.

suficientes para darles una respuesta adecuada mediante las medidas que se lleven a cabo en los ámbitos familiar y en la asistencia civil, sin la necesidad de amparo judicial sancionador del Estado. Así, cuando el infractor sea un menor de 14 años, no se le podrá exigir responsabilidad penal en virtud a lo dispuesto en la Ley 5/2000.

Según lo mencionado anteriormente queda constatado que el ordenamiento ha reducido el límite mínimo de edad penal para reconocer al menor con un mayor grado de entendimiento.

El legislador ha actuado así ya que ha entendido que existe un aumento entre la población de menor edad, por ello el rebajar el límite de edad penal, con el objetivo de frenar de alguna forma este fenómeno social. Se puede deducir que en la adolescencia el niño presenta un desarrollo incompleto, no sólo físico sino psíquico en su doble vertiente intelectual y emocional. Hasta esta edad se ha entendido que el menor no tiene capacidad suficiente para comprender, ni un adecuado desarrollo de su voluntad. Según lo demostrado por la psicología evolutiva, un niño de 14 años no tiene la capacidad para establecer juicios autónomos y si a partir de la mencionada edad. Por ello el legislador ha tenido en cuenta dicha edad y no otra.¹²⁸

Durante este periodo ya de madurez comienza a comprender el alcance y el significado de sus propios actos, generándole una capacidad para comprender y ser consciente de la injusticia de sus actos.¹²⁹

La responsabilidad penal como se puede intuir es totalmente diferente a la responsabilidad personal del menor, esta última hace referencia a la madurez y conciencia de la consecuencia de sus actos. Se puede afirmar que el menor no es responsable moralmente de sus actos hasta que no se dé un proceso de resocialización capaz de inculcarle las pautas básicas de la comunidad en la que

¹²⁸ ETXEBARRIA ZARRABEITIA, XAVIER; Algunos aspectos de Derecho sustantivo de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y de su reforma en materia de terrorismo, en ICADE, Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, núm.53, Madrid, mayo- agosto, p.93.

¹²⁹ LÓPEZ SÁNCHEZ, C; *La responsabilidad civil del menor*, Madrid, 2001, p.379 y 390.

convive. Dotarle de la responsabilidad para que pueda paralizar sus actos ilícitos.¹³⁰

El principio de resocialización personal es propio de la Ley 5/2000, de 12 de enero ya que su objetivo es conseguir la mínima autorresponsabilidad de sus actos desde una perspectiva moral. Si se tiene en cuenta que se trata de una disposición sancionadora, pretende ante todo una intervención educativa mediante la adopción de medidas preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor. Por todo ello, se puede deducir su naturaleza penal y sancionadora-educativa.

Según la exposición de motivos de la LRPM, la responsabilidad de los menores debe distanciarse de la de los adultos por el carácter primordial de intervención educativa y que establece diferencias entre las sanciones de un mayor y menor de edad. De la mencionada exposición de motivos se deduce el rechazo de algunas de las finalidades entre el hecho y la sanción, la intimidación del destinatario de la norma o el ejercicio de la acción penal por la víctima o por otros particulares, cuya participación en el procedimiento se contempla de un modo más bien limitado (art 25 LORPM).

En esta ley anteriormente mencionada rige el principio de intervención mínima, en el sentido de calificar de relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento judicial, mediante la imposición de medidas tales como el resarcimiento anticipado o la propia conciliación entre la víctima y el infractor (art.18 y 19). Añadir los supuestos de suspensión condicional de la medida impuesta (art. 40) o de sustitución de la misma durante su ejecución (art 14 y 51), por otra que se estime más adecuada.

Por otro lado, se puede apreciar el criterio preventivo-resocializador que se ejecuta en la práctica mediante la imposición de medidas respondiendo más a una finalidad terapéutica que sancionadora. Un ejemplo de ello sería la medida de amonestación, en la que el propio juez declara al menor las razones por las que le hace socialmente intolerable los hechos cometidos; le hace comprender

¹³⁰ AA. VV, Los menores en el derecho español, coord. por Isabel Lázaro González, Madrid, 2002, p.89-91.

la gravedad de los mismos y sus consecuencias para él y para la propia víctima, estableciéndose recomendaciones para el futuro (art.7.1. 1º).

En cuanto a las medidas reguladas por la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor, en adelante LORPM, concretamente la de prestaciones en beneficio de la comunidad, en la que el menor debe realizar una actividad en beneficio de la colectividad en su conjunto o de las personas que se encuentran en situación de precariedad. Es muy común pues el menor ha de comprender durante su realización, que la sociedad o determinadas personas han podido sufrir de modo injustificado unas consecuencias negativas que derivan de su conducta mereciendo la no aceptación y reproche de la sociedad, siendo por tanto la prestación de dichos trabajos una forma de reparación justa o acto de reparar el daño causado (art. 7.1º. j).

En cuanto a la realización de tareas socio- educativas, consistentes en que el menor realice actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social (art.7.1. k), en la convivencia con una persona, familia o grupo educativo, adecuadamente seleccionados, que se ofrezcan para cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor (art.7.1. i) o en la asistencia a un centro de día, donde se realizan actividades de tipo socio-educativas (art. 7.1.f).

Así mismo, respecto a la medida de libertad vigilada, encaminada a hacer un seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela o lugar de trabajo, teniendo en cuenta u ofreciéndole una ayuda para superar ciertos aspectos que determinaron la infracción cometida (art. 7.1.h).

En cuanto a las medidas de internamiento tienen el objetivo de disponer de un ambiente capacitado para ofrecer una educación y reorientar las deficiencias que han generado su comportamiento antisocial (art 7.1º. a), b) y d)).

Las medidas anteriormente mencionadas se realizan en centros especializados para menores, en contraposición a los previstos en la legislación penitenciaria para los mayores de edad penal (art. 54. 1º). En este sentido estarán divididos en módulos adecuados a la *edad, madurez, necesidades y habilidades sociales del menor interesado* (art. 54. 3º).

Según todo lo mencionado anteriormente, la actividad desarrollada en los centros en los que se realizan las medidas de internamiento, será siempre cumpliendo el principio de resocialización, por lo que favorecerá en todo momento la vida en el centro con la vida en sociedad (art. 55).

Para ejecutar una medida adecuada la Ley valora no sólo la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad del menor, así como los informes emitidos por los equipos técnicos y en última instancia, las entidades públicas de protección del menor.

La Ley Orgánica 5/2000, ha sido objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, que tiene como objetivo el desarrollo de dicha Ley en cuanto a la actuación del equipo técnico y la Policía Judicial, a la ejecución de las medidas cautelares.

En cuanto al Reglamento, los profesionales y organismos que intervengan en la ejecución de las medidas deberán actuar de acuerdo a los principios del interés superior del menor, así como respetar el libre desarrollo de su personalidad, la aplicación de programas principalmente educativos con el objetivo de inculcar valores como son: *la responsabilidad y el respeto a los derechos y libertades de los demás, la prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social; el fomento de la colaboración de los padres, tutores o representantes legales durante la ejecución de las medidas y la educación de las actuaciones a la edad, personalidad y circunstancias personales y sociales de los menores* (art 6 Reglamento).

El equipo técnico, anteriormente mencionado, es un órgano que está formado por un conjunto de profesionales capacitados en la valoración de las circunstancias personales y familiares del menor, tiene una gran importancia en el proceso de selección de la medida que deberá serle impuesta. Su principal misión es establecer lo que es más beneficioso para el interés del menor, mediante la elaboración de un informe sobre su situación psicológica, educativa y familiar, así como su entorno social para adoptar una medida y no otra.

El informe será requerido por el Ministerio Fiscal durante la instrucción del expediente (art 27. 1º LORPM), seguidamente se remite al Juez de Menores

(arts. 27.5º. LORPM y 4. 1º Reglamento). Y posteriormente, podrá ser complementado con el criterio de las entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de menores y conozcan la situación del menor expedientado (arts. 27. 6º LORPM y 4 Reglamento).

Todas las medidas ya comentadas anteriormente, así como el procedimiento de ejecución, que más adelante se explicarán más detenidamente, tienen como finalidad cumplir con los principios de responsabilización social, resocialización, preventivo-educativo y el de intervención mínima.

Independientemente de lo mencionado anteriormente, se entiende que la intención del legislador es positiva, así como el hecho de que, de acuerdo a los principios anteriormente mencionados, se diferencien en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, diferenciándose dos tramos. Por un lado, de 14 a 16 años, y, por otro lado, de 17 a 18 años. Según lo establecido por el legislador esta clasificación es causada por las diferentes características que tienen y que requieren desde un punto de vista científico y jurídico un tratamiento diferenciado, a los mayores de 16 años.

En la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor se refiere a personas a quienes se aplica dicha Ley, utilizando el término menores para referirse a los que no han cumplido aún 18 años, y a jóvenes para referirse a los mayores de dicha edad (art. 1. 4º LORPM).

Esta ley suscita ciertas dudas sobre si los menores emancipados responden civilmente. Por el contrario, sí que deja claro en su tipificación que penalmente sí que responden; pues expone en su tenor literal “quedan comprendidos en su ámbito de aplicación, las personas mayores de 14 y menores de 18” (art. 1.1). sin embargo, en lo que refiere a la responsabilidad civil del delito, la norma muestra alguna contradicción, haciendo responsable de los hechos al menor de 18 años y a las personas que tienen la obligación de guarda sobre él (padres, tutores, acogedores y guardadores legales o, de hecho) (art. 61. 3º).

La duda anteriormente planteada se podría resolver alegando que, la norma incluye en su ámbito de aplicación a todos los menores de 18 años, quedando también comprendido el menor emancipado. Consecuentemente, deberán responder solidariamente con él sólo las personas que tienen la guarda, entre las cuales no se encuentra el curador.

La función de esta figura legal de protección es únicamente ejercer una asistencia ofreciendo su autorización para los actos tipificados en los artículos 323.1º CC y 159.1º CC.

Ahora bien, si se tiene en cuenta la responsabilidad civil solidaria de los padres, tutores, acogedores y guardadores se fundamenta en la obligación de guarda que le es determinada sobre el menor. Cuando el menor se emancipa la mencionada obligación desaparece y con ella la imputación de la responsabilidad. Si el curador no responde solidariamente con el menor, ya que no está obligado, el menor emancipado, no se encuentra incluido en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de delito o falta penal.¹³¹

En este sentido, al menor que en situación de emancipación se le aplicará la ley 5/2000, de 12 de enero, con el objetivo de exigirle responsabilidad penal en el caso de la comisión de un hecho típico, antijurídico, culpable y punible, de conformidad con lo establecido en el artículo 1. 1º de la LORPM.

Ahora bien, respecto a la responsabilidad civil derivada de dicho delito o falta penal, no podrá ser de aplicación el artículo 61. 3º de esta Ley, sino que será de aplicación lo dispuesto en el Código Penal para los mayores de edad (art. 109 ss. CP).

En definitiva, cuando se trate de exigir responsabilidad civil derivada del delito o falta penal a un menor emancipado, dicha responsabilidad debe reclamarse, como ya ha mencionado anteriormente por el propio Código Penal, en caso de mayores de edad.

La Ley 5/2000 regula los mayores de 18 años y menores de 21, así mismo lo dispone el artículo 69 del CP actual, el cual contempla la posibilidad de que estos

¹³¹ VAQUER ALOY, A; *La responsabilidad civil en la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores: una propuesta de interpretación*, en Revista Jurídica La Ley, T.1, Madrid, 2001, p.1632.

jóvenes queden sometidos a la Ley que regula la responsabilidad penal del menor. Para que la mencionada Ley pueda ser de aplicación han de concurrir una serie de características que a continuación se detallan:

1. Que el hecho cometido sea una falta o delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas, ni grave peligro para la vida o la integridad física de las mismas.
2. Que el imputado no haya sido condenado por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos 18 años.
3. Que las circunstancias personales y el grado de madurez aconsejen la aplicación de la ley, y cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe (art. 4).

La Ley 5/2000, de 12 de enero, *exige una responsabilidad que no es exigible a los menores en quienes concorra alguna de las causas de exención o e extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal* (art. 5 LORPM).

Si hacemos referencia al artículo 118.1ºCP, el cuál tipifica los criterios para hacer efectiva la responsabilidad civil. Según el artículo anteriormente mencionado, cuando el menor haya sido el autor de una acción típica, antijurídica, punible pero no culpable, serán responsables civiles subsidiarios quienes lo tengan bajo su potestad o guarda, siempre que se pruebe que su actuación fue con culpa o negligencia.¹³²

Respecto a los menores en quienes concurren las circunstancias eximentes previstas en los números 1º, 2º y 3º del propio artículo 20 del actual CP les será de aplicación, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7. 1º d) y e) de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor. Dichas medidas son: internamiento terapéutico y el tratamiento ambulatorio, siempre en aplicación a casos de anomalías o alteraciones psíquicas, estados de dependencia al alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción (art. 5. 2º LORPM).

¹³² TESÓN MARTÍN, F; *La responsabilidad civil en la nueva Ley Penal de Menores*, en Revista Jurídica. La Ley, T.7, Madrid, 2001, p.2.

3.3 LA VIGENTE NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

El Derecho Penal de menores en España está formado por un conjunto de normas que regulan las consecuencias jurídicas que se aplicarán a un menor cuando cometa un delito tipificado en el CP.¹³³ Como se ha comentado anteriormente, ésta normativa ha sido modificada en numerosas ocasiones desde los primeros usos o y costumbres hasta la regulación actual. Finalmente ha sido el vigente CP de 1995 el que ha fijado dicha materia, pero, aún sigue vigente el problema de la regulación de la responsabilidad penal de los menores al no haberse aprobado una Ley específica, siendo urgente y necesaria su elaboración.¹³⁴

La determinación del límite de edad se encuentra basada en criterios político criminales, además de criterios sociológicos. Hoy en día, se considera que la etapa de la adolescencia se ha establecido por los periodos de formación obligatoria, hasta los 16 años. La normativa internacional influyo en la nacional en cuanto a la regulación de los menores. Se sustituyo el modelo tutelar por otro especial, caracterizado por la responsabilidad de los menores, incluyendo garantías procedimentales y desarrollando una serie de consecuencias jurídicas para alcanzar su reeducación y reinserción social.¹³⁵ En este sentido, la Convención sobre Derechos del Niño,¹³⁶ en su art. 40, requiere de una jurisdicción especializada, que enjuicie los hechos atendiendo, no solo al delito y su gravedad, sino también a la edad y las circunstancias del menor, buscando garantizar los derechos de este.¹³⁷

Como antecedentes a la Ley específica de menores, cabe mencionar los intentos anteriores a su elaboración, el Anteproyecto de 27 de abril de 1995, el Anteproyecto de 30 de octubre de 1996, la Proposición de 29 de noviembre de

¹³³ NIETO MORALES, C; Intervención con menores en conflicto con la ley, p.9.

¹³⁴ DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G; Imputabilidad y edad penal”, p.14.

¹³⁵ CARMONA SALGADO, C; “Legislación penal de menores en los sistemas jurídicos peruano y español. Un estudio comparativo”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 4, 2010, p. 91-93.

¹³⁶ Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, (Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/PAGES/crc.ASPX>; última consulta: agosto 2020.

¹³⁷ CANO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 13, 2011, p. 12-16.

1996, el Anteproyecto de 1 de julio de 1997, y, en último lugar el Proyecto de 1998.¹³⁸

3.3.1 La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORRPM)

En los primeros inicios del siglo XXI, tras varios años de Anteproyectos y Proyectos, se aprobó la LORRPM¹³⁹, representando una importante reforma en el ámbito del Derecho Penal de menores, siendo el un único texto legal que regulaba todos los aspectos sustantivos, procesales y de ejecución en materia de responsabilidad penal de menores.

La LORRPM generó una norma general y otra especial. Esto supuso complementar el sistema normativo sobre responsabilidad penal de los menores dispuesto por el CP de 1995, el cual adaptaba toda la legislación penal al sistema constitucional, con el objetivo de crear un sistema diferente de responsabilidad penal para los menores, con el objetivo de evitar la imposición de penas y establecer medias.¹⁴⁰

Fue irrealizable que la Ley se aprobase simultáneamente con el CP, la Disposición Final Séptima del CP dejó en stand-by la entrada en vigor del art. 19 sobre la elevación de la edad penal a 18 años, hasta pasados 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero se intentaron soluciones para evitar que a los menores de 18 años y mayores de 16 se les siguiesen aplicando, hasta la entrada en vigor, las normas previstas en el CP de adultos.¹⁴¹

Ante la situación anteriormente comentada, la Disposición Derogatoria Única y la Disposición Transitoria Duodécima prorrogaron la vigencia de la regulación anterior, manteniendo hasta la entrada en vigor de la LORRPM, el régimen jurídico de la minoría de edad penal del CP de 1973, en base al cual el límite de edad penal eran los 16 años. Sin embargo, a los mayores de 16 y menores de 18 años, se les ha aplicado la atenuante de sustitución del internamiento por

¹³⁸ VIANA BALLESTER, C, “La responsabilidad penal del menor; naturaleza y principios informadores”, en Revista Penal, 13,2004, p. 157-159.

¹³⁹ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641>; última consulta: agosto 2020).

¹⁴⁰ CÁMARA ARROYO, S; Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitenciaria, p. 455-457.

¹⁴¹ VENTAS SASTRE, R; La minoría de Edad Penal, p.208-242.

centros de reforma o de reducción de la pena en uno o dos grados (arts. 9.3 y 65 CP).¹⁴²

El 13 de enero de 2001 se derogaron todos los preceptos del CP de 1973, mediante la Disposición Final Quinta de la LORRPM, entrando en vigor el art. 19 CP de 1995 que determinaba la edad de responsabilidad penal siguiendo el criterio cronológico o biológico puro. Establece dicho precepto legal que los menores de 18 años no serán responsables penalmente con arreglo a este CP. Ahora bien, en este sentido el párrafo segundo, el cual expone en su tenor literal que *el menor de 18 años que cometa un delito podrá ser responsable en virtud de la Ley que regule la responsabilidad penal del menor, en este caso, la LORRPM*. Es por este hecho que el mencionado precepto legal no instaura la inimputabilidad de los menores de 18 años, sino que hace una remisión normativa a una Ley especial.¹⁴³

Es con esta Ley, aprobada el 12 de enero de 2000, cuando se implanta un modelo de responsabilidad o de justicia penal de menores. La LORRPM está “basada en principios de educación, de intervención mínima, de interés superior del menor, de flexibilidad en la elección y ejecución de las medidas y de reconocimiento de todas las garantías que se derivan del respecto a los derechos”.¹⁴⁴ Tiene naturaleza jurídico-penal, regulando y cumpliendo las garantías de la CE y la doctrina. La Exposición de Motivos declara que se trata de una Ley de “naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa”¹⁴⁵ y que tiene un carácter preventivo-especial imponiendo medidas “orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor”. Según se ha mencionado anteriormente, ello quiere decir que, dicha norma regula un proceso penal, pero con importantes especialidades, tratando de adaptarlo a los menores de 18 años, alejándose de los principios inspiradores del proceso penal de adultos.¹⁴⁶

¹⁴² JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Menores y responsabilidad penal: el debate se reabre”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 49, 2015, p.157-158.

¹⁴³ DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G; “Imputabilidad y edad penal”, p.12-13.

¹⁴⁴ CANO PAÑOS, M.A; ¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, p.3.

¹⁴⁵ Exposición de Motivos II.6. Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, aprobada el 12 de enero de 2000.

¹⁴⁶ Exposición de Motivos I.5. Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, aprobada el 12 de enero de 2000.

En virtud a lo mencionado anteriormente se añaden las medidas que tienen carácter sancionador-educativo al tratarse de consecuencias jurídicas con naturaleza de penas, generando reacciones penales a un hecho delictivo, pero con objetivos educativos y de reinserción social.¹⁴⁷

Según lo dispuesto en el art. 5 LORRPM, los menores en un principio se van a considerar sujetos imputables y responsables, siempre que no concurra alguna de las causas de exención de la responsabilidad del art. 20 CP, no pudiendo en ningún caso ser sancionados en supuestos en los que un adulto no lo sería. Es por ello, que la ley comienza con la premisa de que, a partir de los 14 años, cualquier persona ha adquirido ya la capacidad para comprender lo ilícito. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el hecho de que se hallen en un periodo de formación de la personalidad explica que la responsabilidad tendrá un carácter especial ya que no había podido adquirir la maduración necesaria para interiorizar las normas. En estas condiciones, un tratamiento penal y retribucionista sería una reacción injusta e incoherente con los principios constitucionales y con las normas internacionales. Por todo ello, la reacción social no debía ser castigo, sino más bien de medidas educadoras.¹⁴⁸

Si atendemos a las circunstancias atenuantes, la LORRPM no ha recogido expresamente la posibilidad de aplicar las del CP, como si lo ha hecho con las eximentes. Teniendo en cuenta esta situación, y además que la Ley tiene sus propias reglas, así como la supletoriedad del Derecho Penal común que se dispone en la Disposición Final Primera, nada impide aplicar las atenuantes del art. 21 CP. Así pues, el propio juez tendrá libertad en la apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal al no existir una lista tasada, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y otras circunstancias personales o familiares.¹⁴⁹

Respecto al principio del interés superior del menor que es el más importante y que prima respecto al resto, siendo de esta forma como la ha establecido la

¹⁴⁷ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 477.

¹⁴⁸ CAÑO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?”, p.5-10.

¹⁴⁹ CÁMARA ARROYO, S; “Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delincuentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal”, en ADPCP, vol. LXVII, 2014, P. 290 Y 292-293.

Convención sobre los Derechos del Niño, concretamente en su artículo 3.1 y la CE en el artículo 10.2, el cuál expone en su tenor literal, que *todas las instituciones jurídicas debían atender, en primer lugar, al interés superior del menor y la LORRPM*. Lo mencionado anteriormente hace referencia a que las cuestiones que se generen en este concreto ámbito han de resolverse buscando lo más conveniente para el menor. Todo ello, consigue apartar la naturaleza jurídica del sistema de justicia juvenil de la de adultos.¹⁵⁰

La LORRPM también ha introducido en su art. 19 la oportunidad de que el Ministerio Fiscal sobresea el caso por causa de conciliación o reparación del daño causado atendiendo a la gravedad y circunstancias del hecho y del menor. Además, el art. 27. 3 permite ejercitar una actividad reparadora, de conciliación o de mediación con la víctima. Por lo tanto, este principio permite alejar al menor de la justicia penal, con el fin de evitar los efectos del proceso y cumpliendo el objetivo de la Ley por tener un alto contenido educativo.¹⁵¹

Finalmente, se hace especial mención a los siguientes principios: en cuanto al principio de intervención mínima se acude a otras vías para lograr la efectiva reinserción del menor, por otro lado, el principio de publicidad restringida, que vela por el derecho del menor a su intimidad, a su propia imagen y a su honor; y el principio de prohibición de exceso o proporcionalidad que aparece en el artículo 8.2 delimitando la duración de ciertas medidas privativas de libertad.¹⁵²

Ya el CP de 1995, elevó la edad penal de los 16 a los 18 años y cinco años más tarde, el legislador español promulgó la LORRPM, que supuso la adopción de un modelo educativo-sancionador para responder a los delitos cometidos por los mayores de 14 años y los menores de 18. Esta regulación fue específica de los menores y separada del régimen penal de adultos dándole a los castigos un carácter educativo y resocializador (art 55 LORRPM), con el objetivo de minorizar el riesgo de la intervención penal de los menores en los procesos y atendiendo,

¹⁵⁰ CANO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?”, p.17-20.

¹⁵¹ La Recomendación número (87) 20, de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre Reacciones sociales ante la delincuencia juvenil, en su regla II recomienda: “Alentar el desarrollo de procedimientos de desjudicialización y de mediación (...) a fin de evitar a los menores la asunción por el sistema de justicia penal y las consecuencias derivadas de ello”.

¹⁵² VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 484-492.

en todo momento, al interés superior del menor para garantizar la continuidad de su desarrollo libre y autónomo como persona.¹⁵³

A continuación, se analizará detalladamente cada uno de los tramos de edad a los que se refiere la aplicación de la LORRPM en cuanto al ámbito subjetivo y objetivo.

3.3.1.1 Ámbito subjetivo

El art. 1 de la LORRPM establece que esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de los mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas¹⁵⁴ así mismo en el CP o las Leyes penales especiales, a los que se refiere como “menores”. Además, regula que podía aplicarse, según el art. 1.2, a los mayores de 18 y los menores de 21, en los términos establecidos en el artículo 4, a los que denomina “jóvenes”, pero como veremos más adelante, esto no tuvo lugar. Sin embargo, parece que deja fuera este régimen a los menores de 14 años, considerándolos irresponsables penalmente.¹⁵⁵

La falta o escasa madurez de los menores les excluye de la responsabilidad penal, impidiendo que sean objeto de un procedimiento penal, pues carecen de la madurez, que es el requisito básico de la imputabilidad. Por tanto, en los hechos delictivos cometidos por menores faltaría la culpabilidad.

El concepto de imputabilidad penal se establece en relación con la situación psíquica en que se encuentra el autor. Por lo tanto, son requisitos de la imputabilidad penal:

1. La capacidad intelectual y volitiva (concepto psicológico de culpabilidad) que ha sido sustituida por la capacidad de comprensión de la antijuricidad

¹⁵³ CRUZ MÁRQUEZ, B; “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”, en AFDUAM 15,2011, p. 242-245.

¹⁵⁴ Cuando se elaboró la LORRPM, el CP de 1995 regulaba tanto delitos como faltas, sin embargo, actualmente, las faltas han desaparecido, desde el 1 de julio de 2015, existiendo únicamente delitos con la reforma de CP mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pero la LORRPM no se ha reformado para eliminar referencia a las familias.

¹⁵⁵ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 493-496.

- y de actuar conforme a la misma (concepción formal o normativo de la culpabilidad).
2. La capacidad de actuar libremente.
 3. La normalidad bio-psíquica o ausencia de anomalías que impidan la comprensión del hecho o actuar en conformidad (ausencia de eximentes de responsabilidad del art 20 CP).
 4. Cierta grado de madurez psico-física.
 5. La capacidad de entender y ser motivado por la norma penal, la cual no debe limitarse a un mero conocimiento de la ilicitud del hecho o contrariedad al Derecho, sino en una capacidad valorativa del sujeto.

El desarrollo de la personalidad es un proceso continuo, exclusivo ya que depende de cada persona, que no se alcanza en un momento exacto y que está determinado por diversos factores (biológicos, psicológicos, sociales, etc.). siendo necesario realizar un estudio individual. Pese a ello, lo que sí está claro es que la imputabilidad penal del menor deberá atender a las circunstancias personales del mismo y a la gravedad del hecho, siendo estrictamente necesario que la medida sancionadora-educativa se adecue también a su personalidad.¹⁵⁶

Como se ha mencionado anteriormente, la LORRPM dispone tres estadios de edades a los que imputa la responsabilidad de diferente modo:

- Régimen de los menores de 14 años.

La LORRPM regula en su art. 3 el “régimen de los menores de catorce años”, en el que establece que, cuando el autor de los hechos ilícitos sea un menor de 14 años, no se le exigirá ningún tipo de responsabilidad con arreglo a esta Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y además disposiciones vigentes. Con ello, se puede deducir que es este precepto, y no el art. 19 CP, el que establece el límite de la minoría de edad como causa de inimputabilidad. Los menores de 14 años serán totalmente inimputables y, por este hecho, los exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal.¹⁵⁷

¹⁵⁶ CÁMARA ARROYO, S; “Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delincuentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal”, p. 250-253.

¹⁵⁷ DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G; “Imputabilidad y edad penal”, p. 18-19.

Es por ello que se aplica un criterio biológico-cronológico a la hora de exigir responsabilidad penal a los menores, una presunción iuris et de iure de la inimputabilidad. Por lo tanto, se dan dos situaciones según la edad ya comentadas anteriormente, de gran relevancia, donde la acción realizada será típica y antijurídica, pero no podrá ser culpable y punible penalmente.¹⁵⁸

Las ciencias psicológicas y psiquiatras no pueden afirmar tajantemente la edad en la que el menor adquiere la capacidad de comprensión o un grado de madurez mínimo, pero se ha estimado que esa edad son los 14 años según acuerdos políticos.¹⁵⁹

Dicha determinación tiene como fundamento el considerar inadecuado que, por debajo de esa edad, los menores entren en contacto con las instancias judiciales y sufran las incidencias de un proceso. La Exposición de Motivos de la LORRPM, hace referencia justificando la fijación del límite en 14 años “con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado”¹⁶⁰

Se puede deducir que los 14 años es una edad demasiado temprana para que un menor deba responder por la comisión de un delito, es por ello que sólo determina la aplicación del tratamiento penal específico dirigido al mismo.¹⁶¹ Es por este motivo, por el que, a los menores de 14 años no se les exigirá responsabilidad conforme a la LORRPM ni conforme a ninguna otra ley penal, (arts. 1.1 y 3). Por el contrario, sí que se les aplicarán las normas de protección de menores del CC y demás disposiciones vigentes, estableciéndose la responsabilidad plena y considerándoseles imputables civilmente, con independencia de la madurez mental.

¹⁵⁸ VIANA BALLESTER, C; “La responsabilidad penal del menor: naturaleza y principios informadores”, p. 173.

¹⁵⁹ Que la instauración de límite mínimo de edad se base en criterios políticos, ha sido señalado en un reciente debate en las jornadas de Jueces de Menores celebradas en el CGPJ, en las cuales se llegó a la conclusión de que el límite inferior era una cuestión de política criminal y no del grado de madurez del menor.

¹⁶⁰ Exposición de Motivos I.4.

¹⁶¹ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 496-501.

Es por ello que esta remisión se entiende correcta ya que los delitos cometidos por menores suelen ser irrelevantes considerando suficiente imponerles una adecuada respuesta educativa, pero en ningún caso una acción punitiva. El menor de 14 años no podrá verse inmerso en un proceso cuya sentencia radique en una acción punitiva, sino una serie de medidas de protección a cargo de la entidad pública.¹⁶² La competencia en materia de protección es está en manos de las Comunidades Autónomas y no existe una regulación uniforme, lo que provoca una gran diversidad de actuaciones.¹⁶³

➤ Régimen de los menores de 14 a 18 años

El artículo 1.1 LORRPM dispone que dicha norma se aplicará para exigir la responsabilidad de los mayores de 14 y menores de 18 años. El régimen de responsabilidad para estas edades se encuentra tipificado en el art. 5.1. Se determina que los mismos serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los delitos contenidos en el art 1 y no concurra ninguna causa de exención de la responsabilidad criminal previstas en el CP.

En cuanto a esta franja de edad, cabe precisar que, si los 18 años establecen el fin de la adolescencia y el comienzo de la juventud, lo que suele faltar a esta edad es la madurez personal.¹⁶⁴

Los menores comprendidos en edades entre los 14 y 18 años sometidos a la LORRPM son considerados plenamente imputables, y no de forma atenuada, sino que la responsabilidad penal tendrá una forma especial y particular, diferente a la CP. El propio art. 19 CP no exime a los menores de toda responsabilidad, sino que deriva la responsabilidad a las reglas del concepto de culpabilidad (capacidad para comprender el ilícito y actuar conforme a dicha comprensión), y no a la tesis del discernimiento.¹⁶⁵

Si para el menor de 14 años el fundamento de su irresponsabilidad es la inimputabilidad, para los mayores de 14 años y menores de 18 son criterios de

¹⁶² JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, p. 12-17.

¹⁶³ CRUZ MÁRQUEZ, B; “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”, p. 254.

¹⁶⁴ VENTAS SASTRE.R; La Minoría de Edad Penal, p.501-503.

¹⁶⁵ CÁMARA ARROYO, S; “Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delincuentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal”, p. 278-279.

*política criminal los que permiten que, aun siendo imputables, se les aparte del CP creando para ellos un sistema penal especial. Por ello, serán imputables y culpables pero las medidas que se les impondrán no se fundamentan en la culpabilidad sino en razones de política criminal que consideran más adecuado sustituir la pena por una intervención sancionadora-educativa.*¹⁶⁶

Son muchas las ocasiones que se dan supuestos especiales por encontrarse en una edad cercana a los 18 años. Es evidente que los menores de edades más alejados tendrán, por lo general, una madurez mental inferior a la del menor que tenga casi 18 años. La LORRPM ha tenido en cuenta este aspecto por lo que ha establecido ciertas diferencias en la previsión de las medidas del art. 7 atendiendo a su duración, dependiendo de si se trata de menores de entre 14 y 16 o de entre 16 y 18 años.¹⁶⁷

Respecto a los dos tramos de edad¹⁶⁸ anteriormente expuestos, la norma señala un tratamiento específico en lo referido a la aplicación prescriptiva del internamiento en régimen cerrado, así como el régimen agravado de duración de las medidas.¹⁶⁹

➤ Régimen de los mayores de 18 y menores de 21 años

La antigua LORRPM, concretamente en el art.4 permitía aplicar esta Ley a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 21, así lo establecía el art. 69 CP. El precepto legal del art. 19 CP determinaba la responsabilidad penal de una persona, cuando ese cometía un hecho delictivo.

El art. 4.2 establece que para que se pudiese aplicar dicho régimen, excepcional, deberían cumplirse tres condiciones o requisitos:

1º El hecho cometido fuera una falta o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas, ni grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas, tipificado en el CP.

¹⁶⁶ OLARTE RUIZ, S; La responsabilidad penal del menor, Universidad de la Rioja, la Rioja, 2018-2019, P.33

¹⁶⁷ ARTÍCULO 10.

¹⁶⁸ Exposición de Motivos II.10.

¹⁶⁹ CRUZ MÁRQUEZ, B; “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”, p. 254-255.

2º El menor no hubiera sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los 18 años.

3º Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejasen la aplicación de la LORRPM, siempre recomendado por el Equipo Técnico.

Se deduce una mayor corrección en cuanto a que los sujetos a estas edades, fuese de aplicación el CP, aunque reconociéndoles una responsabilidad atenuada y un régimen como el previsto en las normas recogidas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. La ausencia de capacidad económica que hiciera viable dicho régimen, estableció la reforma que suspendió la entrada en vigor del art. 4 LORRPM, quedando los mayores de 18 años bajo la aplicación del CP siendo, por lo tanto, plenamente responsables por la comisión de delitos.¹⁷⁰

3.3.1.2 Ámbito objetivo

Desde un punto de vista objetivo, la exigencia de responsabilidad penal a los comprendidos en edades entre los 14 y 18 años depende de la efectiva comisión de un hecho típico como delito o falta en el CP, así mismo lo contempla el art. 1.1 LORRPM.

Se entiende que el Derecho Penal de menores es accesorio al de adultos, pero con especialidades, autonomía en el procedimiento y consecuencias jurídicas, contando con un sistema de determinación de medidas. Por lo tanto, las conductas típicas a las que se aplica la LORRPM no son diferentes a las previstas en el CP para las mayores de 18 años.¹⁷¹

Lo único y más importante a tener en cuenta cuando se cometa un delito es el computo de las edades respecto de la comisión del hecho delictivo. *Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga*

¹⁷⁰ VENTAS SASTRE, R; La Minoría de Edad Penal, p. 503-510

¹⁷¹ CRUZ MARQUEZ, B; “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”, p. 256.

incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores (art.5.3 LORRPM).

Por otro lado, se sigue el criterio de tempus regit actum, esto es, el de tomar en consideración la edad que el menor tenía en el momento de cometer el delito.¹⁷²

El computo deberá hacerse “de momento a momento”, de manera que habrá que considerar el momento concreto del día en que se produjo el nacimiento de la persona, así como el momento concreto en el que se cometió el delito. En caso de desconocimiento de la hora del nacimiento, se deberá aplicar el principio “in dubio pro reo” y considerar que en el momento de los hechos aún no había cumplido el infractor la mayoría de edad.

Existen momentos en los que también existen hechos delictivos, en los cuales se suscita un problema con la fijación del momento de comisión. Por ello, la Circular 1/2000, de la Fiscalía General del Estado¹⁷³, determinó unas pautas a seguir. Por ejemplo, para el caso de delito continuado habrá que atender a la edad del sujeto en el momento de la comisión de cada uno de los hechos delictivos, conociendo la jurisdicción de menores los delitos cometidos por un menor cuando tuviera entre 14 y 18 años, y la jurisdicción ordinaria las infracciones cometidas una vez rebasadas dichas edades.

Por otro lado, si nos encontramos con un delito permanente, el sujeto no podrá ser enjuiciado por la jurisdicción de menores cuando hubiera rebasado la edad máxima antes de eliminarse la situación ilícita. Además, el enjuiciamiento del delito permanente por la jurisdicción ordinaria no podrá tener en consideración, a efectos de agravación de la responsabilidad, las conductas cometidas en momentos anteriores a alcanzar los 18 años.

Finalmente, cuando entre la acción y el resultado, el sujeto rebase la mayoría de edad, el criterio a seguir para determinar la jurisdicción a aplicar debe basarse

¹⁷² LAUCES GUTIÉRREZ, A.I y VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C, “Justicia penal de menores en España. Aspectos sustantivos y procesales”, en Curso de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED, 2008, P.4.

¹⁷³ Circular 1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/escarga/CI01-en:https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CI01-2000.PDF?IDFILE=18748173-3639-468e-9595-1d4c1b7ba6d7; última consulta: agosto 2020).

en atender al momento de la acción u omisión ilícita y no al momento del resultado.¹⁷⁴

3.4 REFORMA LEGISLATIVA

La LORRPM ha supuesto la creación de un derecho exclusivo para menores, acogiendo unos principios y considerando al menor como un sujeto en proceso de formación por lo que la consecuencia del delito no puede equipararse a la de los adultos, sino que debe estar orientada a la educación y corrección del menor.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la Ley fue aprobada concretamente el 12 de enero de 2000, entrando en vigor hasta el 13 de enero de 2001. Sorprende que incluso antes de su entrada en vigor fue modificada por dos Leyes aprobadas en diciembre de 2000, la Ley 7/2000 y la LO 9/2000. Estas reformas son consecuencia de los delitos cometidos por los menores y consecuentemente la opinión pública. Dichas modificaciones han aproximado el Derecho Penal de menores, cada vez más, al de adultos. Por ello, el sistema de justicia de menores transitó desde criterios preventivo- especiales, garantías y de responsabilidad de la originaria LORRPM, a un modelo más represivo, acercándose al CP.¹⁷⁵

3.4.1 Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre

La primera modificación de la LORRPM tuvo lugar, como bien se ha dicho, antes de su entrada en vigor a través de la LO 7/2000, de 22 de diciembre, teniendo su causa en el aumento de la delincuencia juvenil.¹⁷⁶ Su objetivo era el endurecimiento de la delincuencia de menores. Ello ha sido consecuencia de sucesos puntuales, pero especialmente graves (Kale Borroka, violencia callejera,

¹⁷⁴ DE LA ROSA GUTIÉRREZ, G; “Imputabilidad y edad penal”, p.30-31.

¹⁷⁵ JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, p.5.

¹⁷⁶ Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659>; última consulta: agosto2020).

ETA...), que han llevado a legislar a causa de los acontecimientos. De forma que, la sociedad veía calmada sus necesidades de justicia.¹⁷⁷

Se destaca en cuanto a algunas de las modificaciones establecidas, los periodos de internamiento en régimen cerrado inicialmente previstos en el art. 9 LORRPM. Así, antes de la reforma, el techo sancionador era de 5 años de internamente cerrado, siendo complementado con una medida de libertad vigilada con asistencia educativa, hasta otros 5 años. Esta duración máxima estaba prevista para los mayores de 16 años, siempre y cuando se tratase de supuestos de extrema gravedad (violencia o intimidación en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad física).

La reforma, en la Disposición Adicional Cuarta, estableció un endurecimiento de las consecuencias penales impuestas a los menores de 18 años por la comisión de delitos de homicidio (art. 138), asesinato (art. 139), agresiones sexuales (arts. 170-180), terrorismo (arts. 571-580) y aquellos que el CP castigue con pena de prisión igual o superior a 15 años, y limitó las medidas, restringiendo la discrecionalidad de los jueces para aplicarlas ya que deberá tener en cuenta las circunstancias, la gravedad del hecho y de la situación psicosocial del humor. De ello, se desprende, la primacía de la finalidad retributiva y preventivo general, frente a la socializadora y preventivo especial del Derecho de menores.¹⁷⁸

Esta Disposición elevó los límites superiores del internamiento en régimen cerrado, quebrando con el principio de flexibilidad, ya que el juez no podrá optar entre varias medidas, sino que tendría que imponer el internamiento en régimen cerrado. Cuando el delito cometido sea alguno de los mencionados, se ampliarán los periodos de internamiento cerrado a 8 años de internamiento, complementado sucesivamente con una de libertad vigilada, hasta un máximo de otros 5 años, para los menores de 16 y 17 años. Sin embargo, a los de 14 y 15 años se les impondrá una medida de internamiento cerrado de un máximo de 4 años, complementada por otra sucesiva de libertad vigilada de máximo de 3 años más.

¹⁷⁷ CANO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?”, p.22-24.

¹⁷⁸ BERNUZ BENEITEZ, M.J; “Justicia de menores española y nuevas tendencias penales. La regulación del núcleo duro de la delincuencia juvenil”, p.16.

Pero esta Disposición aún era más dura para los delitos más graves y, por ello, imponía la medida de internamiento en régimen cerrado de 10 años para los menores de 16 y 17 años y de 5 años para los de 14 y 15 años, cuando fueren responsables de más de un delito, alguno de los cuales estuviese cualificado como grave y sancionado con pena de prisión igual o superior a 15 años de los delitos de terrorismo, según lo establecido en los arts. 571 a 580 CP.¹⁷⁹ Además, en estos tipos de terrorismo, introduce la medida complementaria de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años al de la medida de internamiento y que produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, así como la incapacidad para obtener esos u otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público (art. 42).

Posteriormente, se incorporan penas a menores de edad inspiradas en principios que la LORRPM rechaza, olvidándose del interés superior del menor, de la educación y de la resocialización, primando la necesidad de reducir la alarma social y velando por la defensa de la sociedad. Abandonó el modelo originario de prevención especial y se optó por uno mixto, donde la delincuencia de pequeña y mediana gravedad es orientada por el fin de la prevención especial.¹⁸⁰

3.4.2 Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre y Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre

El mismo día en que se aprobó la ley anterior, el 22 de diciembre, también se aprobó la Lo 9/2000¹⁸¹ que suspendía la ejecución de la LORRPM por un plazo de 2 años, en los que se refiere a infractores de entre 18 a 21 años, regulado en el art.69 CP y art. 4 LORRPM. Esto parece incongruente, pues en la misma fecha, mientras la LO 7/2000 restringía el ámbito del art. 4, la LO 9/2000 suspendía su aplicación durante 2 años.¹⁸²

¹⁷⁹ CANO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, p. 24-26.

¹⁸⁰ VIDAL HERRERO, M.S; Crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores hacia un “modelo social de responsabilidad” del menor infractor, p.162-163.

¹⁸¹ Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medias urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-2000.html; última consulta: agosto 2020).

¹⁸² JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, p.6.

La Disposición Transitoria Única establecía un aplazamiento de la aplicación de la legislación penal de menores a los jóvenes de entre 18 y 21 años, por un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la LORRPM, es decir, hasta el 13 de enero de 2003.¹⁸³

Por otro lado, el 10 de diciembre se estableció la Ley Orgánica 9/2002, la cual no introdujo ninguna modificación en el texto de la LORRPM, únicamente incluyó en su Disposición Transitoria Única¹⁸⁴ una nueva suspensión de la posibilidad de juzgar a los jóvenes de entre 18 y 21 años de acuerdo con las disposiciones legales de la Ley.¹⁸⁵

3.4.3 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre

La LO 15/2003¹⁸⁶ se produjo su creación en el marco de una importante reforma del CP 1995 y la Disposición Final Segunda modificó los art 8 y 25 LORRPM, que regulaban el principio acusatorio y la participación de la víctima en el proceso penal. Modificó las posibilidades de actuación en el proceso de los ofendidos, de sus padres, de sus herederos o de sus representantes legales, incorporando la acusación particular sin límites en su art. 5, equiparándolo al proceso de adultos. Esto ha ocasionado una menor protección al menor equiparándolo procesal y jurídicamente al mayor.¹⁸⁷

Todo lo mencionado anteriormente, se encontraba en clara contradicción con los principios de La LORRPM y, generando una ruptura con el modelo originario, conllevando una quiebra importante con los principios sobre los que se asentaba el modelo de responsabilidad penal de los menores.

3.4.4 Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre

¹⁸³ CANO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, p. 26

¹⁸⁴ Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores. (Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044>; última consulta: agosto 2020).

¹⁸⁵ JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, p.6.

¹⁸⁶ Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.PDF>; última consulta: agosto 2020).

¹⁸⁷ CANO PAÑOS, M.A; ¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, p. 27-28.

En el año 2006 se da la última reforma, esta tiene más transcendencia que las anteriores por el hecho de determinar unos efectos definitivos.¹⁸⁸ Se constituye un nuevo contenido en el artículo 4 entrando en vigor el 5 de febrero de 2007 y se suprimieron los apartados 2 y 4 del artículo 1. Esta reforma acabó con la posibilidad de aplicar la LORRPM a jóvenes de entre 18 y 21 años y es por ello, que había que hacer desaparecer la previsión que permitía aplicar la Ley a estos jóvenes.¹⁸⁹

En definitiva, si cogemos estas reformas, el art 4 originario, cuyo ámbito se restringió con la LO 7/2000 y se suspendió, primero por la LO 9/2000 y después por la LO 9/2002, entró, finalmente, en vigor el 1 de enero de 2007, vigencia que solo duró hasta el 4 de febrero del mismo año, dado que el día 5 cambió completamente de reacción. Por lo tanto, el mismo debió aplicarse desde el 1 de enero hasta el 4 de febrero de 2007, pero a ello se opuso la Fiscalía General del Estado mediante la Instrucción nº 5/2006¹⁹⁰ ya que su derogación mediante LO 8/2006 excluía su aplicación en los hechos anteriores y posteriores al 1 de enero de 2007.

Consecuencia de la derogación del artículo 4, también queda sin contenido el artículo 69 CP, aunque este siga intacto ya que no existe ninguna derogación. En este sentido, igual ocurre con las faltas a que el 1 de julio del 2015 desaparecieron del CP, en virtud de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo¹⁹¹, lo que debería generar una nueva reforma de la LORRPM eliminando la alusión a las mismas en ciertos preceptos.¹⁹²

La Ley anteriormente mencionada amplió los supuestos a los que se puede aplicar el internamiento en régimen cerrado. Solo establecía el delito con

¹⁸⁸ Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/05/pdfs/A42700-72712.pdf>; última consulta: agosto 2020).

¹⁸⁹ JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, p 6-8.

¹⁹⁰ Instrucción nº 5/2006 sobre los efectos de la derogación del artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Prevista por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, (Disponible en: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MN_instrucción5_2006.pdf?idFile=912fc472-07b8-4116-bc8d-444706d8e918; última consulta: agosto 2020).

¹⁹¹ Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439; última consulta: agosto 2020).

¹⁹² JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”, p. 8-9.

violencia o intimidación en las personas, actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. Pudiéndose aplicar a los restantes delitos menos graves si se ejecutan en grupo o en organizaciones (art. 9.2). Por todo ello, prácticamente abarca toda la delincuencia de menores excepto la mencionada en el art. 18 LORRPM.

Si nos centramos en la medida de internamiento en régimen cerrado, el propio artículo 10 LORRPM obliga al Juez a imponerla, en los casos anteriores del art. 9.2, por un tiempo máximo de 3 años para los menores de 14 y 15 años y de 6 años para los de 16 y 17 años, complementada, solo en éstos, con una libertad vigilada de hasta 5 años. Sin embargo, cuando se trate de delitos contenidos en los arts. 138, 139, 179, 180 y 151 a 580 CP, así como los que tengan una pena de prisión igual o superior a 15 años, la duración de internamiento será, por tanto, para los menores de 15 años, la duración del internamiento será de 5 años para los menores de 14 y 15 años y de 8 para los de 16 y 17, complementándose en ambos casos con otra medida de libertad vigilada de hasta un máximo de 3 o 5 años. Añadir un aspecto importante, pues solo en el segundo caso podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida cuando haya transcurrido la mitad de la duración del internamiento.¹⁹³

Se suprime el principio de la medida única ya que el art. 7.4 LORRPM señala que *el Juez podrá imponer al menor una o varias medidas con independencia de que se trate de uno o más hechos*; pero, sin embargo, no está permitido imponer a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase. Además, obliga a que los menores de 18 años cumplan el internamiento en un centro penitenciario si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.¹⁹⁴

En definitiva, estas reformas endurecen las sanciones a los menores velan por un sistema de seguridad ciudadana, intentando subsanar la alarma social y devolver a la sociedad la eficacia de la empatía con la eficacia de la Ley.

¹⁹³ CANO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal Juvenil?”, p. 29-32.

¹⁹⁴ GARCÍA PÉREZ, O; “La reforma de 2006 del sistema español de justicia penal de menores”, en Política Criminal, 5, 2008, p. 2-7.

Es por ello que, el legislador alega la defensa del interés superior del menor, aunque siendo un objetivo primordial, ya no puede ser el único, sino que debe atenderse a otros intereses constitucionales, como la protección de la sociedad y de la víctima. Además, considera que el interés superior del menor es perfectamente compatible con el objetivo de conseguir una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del delito.¹⁹⁵

3.5 AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

Consecuencia de la implantación de duras penas en la historia, España vio clara la necesidad de crear un sistema de penas o, más bien, medidas diferentes a las del CP, por lo tanto, alejadas del marco penitenciario de los adultos.

Curiosamente en España no se estableció un sistema fijo e invariable de medidas, sino que, las medidas han ido endureciéndose.

La Exposición de Motivos de la LORRPM dispone que “la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable”. De ello se desprende la necesidad de ofrecerles una respuesta penal diferente a la de los adultos, con un carácter educativo, tratando de evitar el contacto con instituciones judiciales y posibilitarles la reinserción social.

Hay que diferenciar las penas de las medidas, pues las primeras son instrumentos sancionadores impuestos al infractor, teniendo en cuenta su culpabilidad y aplicando el principio de proporcionalidad entre la duración e intensidad y la gravedad del delito; y las medidas se imponen a sujetos inimputables, carentes de responsabilidad penal según el CP, pero que revelan una peligrosidad social y cuya finalidad no es el castigo, sino evitar que puedan cometer delitos futuros. Por lo tanto, las medidas se refieren a las consecuencias

¹⁹⁵ DOMÍNGUEZ MARTÍN, A; “Responsabilidad penal de los menores: derechos para todos”, en Revista Lex Nova, 2007, p. 22-23.

jurídicas de hechos delictivos cometidos por menores, pero que tienen una finalidad educadora y resocializadora y de prevención de futuras infracciones, y no tanto de represión. Pero ambas tienen aspectos en común, las medidas se parecen a las penas en que el presupuesto es cometer un delito y la consecuencia es privar al infractor de ciertos derechos.¹⁹⁶

Se tiene que tener en cuenta que debe distinguirse dos tramos de edad a la hora de aplicar las penas, por un lado, los menores con 14 y 16 años y, por el otro, los que cuenten con 16 y 17 años. Actualmente, es el art. 7 LORRPM el que regula las medidas actuales y las define de la siguiente forma.

Los Jueces de Menores pueden imponer la medida de internamiento diferenciando varios tipos. En primer lugar, el internamiento en régimen cerrado por el cual los menores residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas; en segundo lugar, el internamiento en régimen semiabierto donde los menores residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo actividades formativas; en tercer lugar, el internamiento en régimen abierto que permitía a los menores llevar a cabo todas las actividades en los servicios normalizados del entorno pero pernoctando en el centro; y, por último, el internamiento terapéutico por el que se deba una atención educativa especializada o un tratamiento específico dirigido a personas con anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia a sustancias, o una alteración en la percepción (art 7.1 a, b, c y d). Estas medidas anteriormente mencionadas de internamiento constarán de dos periodos, el primero que se desarrollara en el centro, y, el segundo, en régimen de libertad vigilada (art 7.2).

El internamiento en régimen cerrado se podrá aplicar ante delitos graves, menos graves pero que se haya empleado violencia o intimidación o se haya generado grave riesgo para la vida o integridad física, o cuando los delitos se cometan en grupos o bandas, debiéndoseles de imponer el art. 10, el cual establece que cuando sean cometidos por un menor de 14 y 15 años el internamiento podrá alcanzar los 3 años, mientras que, si tiene 16 y 17 será de 6 años. En este último supuesto, si el hecho es de extrema gravedad (reincidencia), el Juez deberá

¹⁹⁶ GOMEZ HIDALGO, J.I; “Estudio de las medidas establecidas en la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de Menores”, (Disponible en: <http://www.icace.org/pdf/b04articulo01.pdf>; última consulta: agosto 2020).

complementar el internamiento con una libertad vigilada de hasta de 5 años. Además, solo podrá modificar suspender o sustituir la medida una vez que haya transcurrido el primer año de internamiento. Por otro lado, ante los delitos de los art. 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 CP, o de cualquier otro delito con pena de prisión igual o superior a 15 años, si es un menor de 14 y 15 años, se le impondrá una medida de internamiento cerrado de hasta 5 años, complementada por libertad vigilada de hasta 3 años; pero si tuviera 16 y 17 años, la duración será de hasta 8 años, con otra de libertad vigilada de máximo 5 años. Además, en este caso sólo se podrá modificar, suspender o sustituir la medida, cuando haya transcurrido la mitad de la duración de la misma. En cuanto a estos delitos, el art. 11.2 prevé que cuando se dé una pluralidad de alguno de ellos, la medida de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar 10 años para mayores de 16 años y 6 años para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que les corresponde. Y, finalmente, cuando el delito sea alguno de los comprendidos en los art. 571 a 580 CP (terrorismo), el Juez también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años al de la duración de la medida de internamiento cerrado, atendiendo a la gravedad del delito, al número de los cometidos y a las circunstancias del menor (art. 10.3).¹⁹⁷

Por otro lado, cabe destacar la medida del tratamiento ambulatorio que obligará a los menores a asistir a un centro con cierta periodicidad y seguir las pautas fijadas por el debido tratamiento terapéutico. También se podrá imponer la medida de asistencia a un centro de día en el que realizar actividades, la medida de permanencia de finde semana en el domicilio o en un centro, y la de libertad vigilada por la que se hace un seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo (art. 7.1.e), f), g), y g)).

La LORRPM también regula otro tipo de medidas en el art 7.1. i), j), k) , l), m), n) y ñ) como son la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con sus familiares u otras personas; la obligación de convivir con otra persona, familia o grupo educativo; la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o

¹⁹⁷ FERNÁNDEZ MOLINA, E; “El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2012, p.4-6.

tareas socio-educativas; la amonestación o reproche, la privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o de caza, así como el derecho a obtenerlo; y, por último, la inhabilitación absoluta de todos los honores, empleos y cargos públicos.¹⁹⁸

El art 7.3 tipifica el principio de flexibilidad, teniendo siempre en cuenta el interés del menor a la hora de imponer una medida. *Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor.*

Además, el art. 13 permite que el Juez deje sin efecto la medida impuesta, reduzca su duración o la sustituya por otra, siempre atendiendo al interés del menor y habiendo, éste, recibido el suficiente reproche por su conducta. El art. 51 dispone que el Juez podrá sustituir las medidas por otras que se estimen más adecuadas, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento, siempre que la nueva medida pudiera haberse impuesto inicialmente atendiendo a la infracción.

El régimen anteriormente comentado, se encuentra limitado por prescripciones como el principio acusatorio que impide al juez imponer una medida más grave o duradera a la solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular (art 8.1); la prohibición de que las medidas privadas de libertad superen el tiempo que habría durado si se hubiese impuesto a un adulto (art. 8.1), la prohibición de aplicar la medida de internamiento cerrado cuando se trate de acciones u omisiones imprudentes (art 9.4), la restricción de la aplicación del internamiento

¹⁹⁸ BECERRA, C; “Alternativas educativas ante la responsabilidad penal de los menores infractores”, en Jornadas de Foment de la Investigació de la Universitat Jaume I, 2007, p. 8-10.

en régimen cerrado en determinados supuestos (art 9.2) y el reconocimiento de las mismas causas de exclusión de la imputabilidad que en el derecho penal de adultos e cuyo caso únicamente es posible aplicar el internamiento terapéutico o el tratamiento ambulatorio (art 5.2).

En cuanto a las medidas de internamiento o cualquiera que consistan en el aislamiento o privación de libertad, sería recomendable aplicarlas respetando la proximidad entre el menor y su familia, ya que un alejamiento o aislamiento podría provocar una situación de desarraigo en el menor.

En caso de alcanzar la mayoría de edad, el sujeto pasaría a centros penitenciarios, pues se deduce la nefasta o inútil aplicación de todos los logros ya conseguidos en cuanto a la reeducación del infractor como medida sancionadora. Quedando anulados los resultados positivos que hasta entonces se hubieran alcanzado de cara a la reinserción si se traslada al, ya mayor de 18 años, a un centro penitenciario ordinario para que termine de cumplir la condena.¹⁹⁹

Se puede entender que el legislador, ha tenido en cuenta criterios político-criminales retributivos, sustituyendo principios como el del interés superior del menor y el de reeducación y rehabilitación, por otros ya que ha superpuesto el interés social que el del propio menor.

Finalmente, otro de los problemas es que la ejecución de las medidas está atribuida a las entidades públicas de las Comunidades Autónomas, lo que puede provocar la aparición de regímenes jurídicos diferentes entre los distintos territorios.

A continuación, en el siguiente apartado se detallan cada una de las medidas que pueden imponerse a los menores como responsables de actos ilícitos.

¹⁹⁹ CARMONA SALGADO, C; “Legislación penal de menores en los sistemas jurídicos peruano y español. Un estudio comparativo”, p. 96-107.

3.6. MEDIDAS COMO CONSECUENCIA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

3.6.1 Medidas aplicables a los menores

La LRPM concede una gran discrecionalidad al Juez para la elección de la medida o medidas a imponer, su sustitución, así como la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia.

En el art. 7.1 de la LRPM se encuentran recogidas las sanciones penales susceptibles de ser impuestas a quienes, con una edad comprendida entre 14 y 18 años, cometen una infracción penal. Este precepto legal ha sufrido varias modificaciones. Se pueden destacar la LO 7/2000, de 22 de diciembre, introdujo la inhabilitación absoluta y la LO 8/2006, de 4 de diciembre, introdujo la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o persona allegada y la introducción de la LO 8/2006 apartado 4, que regula expresamente los supuestos en los que el juez considera conveniente imponer más de una misma medida.

Tras las modificaciones anteriormente comentadas, la LRPM prevé actualmente las siguientes medidas: (art 7.1 LRPM).

- a) Internamiento en régimen cerrado.*
- b) Internamiento en régimen semiabierto.*
- c) Internamiento en régimen abierto.*
- d) Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto.*
- e) Tratamiento ambulatorio.*
- f) Asistencia a un centro de día.*
- g) Permanencia de fin de semana.*
- h) Libertad vigilada.*
- i) La prohibición a aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez.*
- j) Conveniencia con otra persona, familia o grupo educativo.*
- k) Prestaciones en beneficio de la comunidad.*
- l) Realización de tareas socio-educativas.*
- m) Amonestación.*

- n) *Privación el permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.*
- o) *Inhabilitación absoluta.*

Aunque en el citado precepto se determine que las medidas están ordenadas “según la restricción de derechos que suponen”, no está claro cuál es el criterio del orden. Como señala Feijoo Sánchez, parece más que el precepto ha querido establecer el siguiente orden: sanciones privadas de libertad (internamientos), sanciones restrictivas o que afectan a la libertad ambulatoria y sanciones privativas de otros derechos (o, más bien, otras sanciones no privativas ni restrictivas de libertad ambulatoria).²⁰⁰

Según todo lo expuesto con anterioridad se puede deducir que las medidas privativas de libertad son: internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, internamiento terapéutico, y permanencia de fin de semana (letras a, b, c, d y g del art. 7.1), en cuanto a las medidas no privativas de libertad se refieren a aquellas que tiene una orientación educativa, en donde debemos incluir el tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de día, la libertad vigilada, la convivencia con otra persona, familiar o grupo educativo, las prestaciones en beneficio de las comunidad, la realización de tareas socio-educativas y la amonestación (regulado en el art 7.1, letras e, f, h, j, k, l y m LRPM); y las complementarias de las medidas de orientación educativa, que podemos concretar la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, la privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del propio derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas, y la inhabilitación absoluta (regulado en el art 7.1 letras i, n y ñ LRPM).

A continuación, se detallan cada una de estas medidas.

²⁰⁰ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.1-16.

3.6.2 Medidas privativas de libertad

- 1) Los internamientos: De todas las medidas privativas de libertad, la más gravosa es el internamiento, pues consisten en el ingreso en un centro, al menos durante parte del tiempo que dura la medida impuesta (art. 7.2 LRPM), estas medidas constan de dos períodos, que a continuación se detallan: el primero, que se llevará a cabo en el centro correspondiente, y, el segundo, en régimen de libertad vigilada, sin que la duración total de ambos periodos pueda exceder los límites establecidos en los art. 9 y 10 LRPM. Para tomar la decisión del internamiento es preceptivo un informe del equipo técnico, posteriormente el juez determinará ya la duración de cada periodo en sentencia.²⁰¹

Según el apartado III.16 de la Exposición de Motivos, se considera que “las medidas de internamiento responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los casos más destacados por la violencia, la intimidación o el peligro para las personas. El objetivo prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o diferencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad. La mayor o menor intensidad de tal restricción da lugar a los diversos tipos de internamiento (...). El internamiento ha de proporcionar un clima de seguridad personal para los implicados, profesionales y menores, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicológico de los menores”. El internamiento en régimen cerrado, consiste en residir en un centro y desarrollar en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio (art 7.1 a LRPM y art 24 del Reglamento). Se expone en la Exposición de Motivos de la Ley que este régimen “pretende la adquisición por parte del menor de los suficientes recursos de competencia social

²⁰¹ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.1-16.

para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y progresivamente autónomo”.

En virtud a lo dispuesto en el artículo 9 LRPM, esta medida sólo podrá ser aplicable cuando los hechos estén tipificados como delito grave, o menos grave, si se ha empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o integridad física de las mismas, y cuando el delito se cometa en grupo o el menor pertenezca o actúe al servicio de una banda u organización criminal.

En cuanto al internamiento en régimen semiabierto, supone la residencia en un centro, pero pudiendo realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida (art. 7.1 b LRPM, y 25 del Reglamento). Según la Exposición de Motivos este régimen “implica la existencia de un proyecto educativo en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al programa y régimen interno del mismo”.

El internamiento en régimen abierto en este caso el menor llevará a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, aunque el menor reside en el centro como domicilio habitual y con sujeción al programa y régimen interno del mismo (arts. 7.1 c de la LRPM, y 26 del Reglamento). La diferencia esencial con el internamiento en régimen semiabierto es que, no sólo se realizan fuera del centro algunas actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, sino todas las actividades, convirtiéndose el centro exclusivamente en el domicilio habitual.

El internamiento terapéutico, según se explica en la Exposición de Motivos de la LRPM, se prevé “para aquellos casos en los que los menores, bien por razón de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programación terapéutica, no dándose, ni, de una parte, las condiciones idóneas en el menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones

de riesgo que exigirían la aplicación a aquél de un internamiento en régimen cerrado”.

El internamiento terapéutico puede ser tanto en régimen cerrado, semiabierto o abierto dependiendo de las necesidades de tratamiento que presente el menor (art 7.1.d LRPM y 27 del Reglamento). Esta es una medida que, como ya se ha señalado y de acuerdo con lo establecido en los arts. 5.2 y 9.5 de la Ley, cuando fuera necesario, les es aplicable a los menores que concurran en cualquiera de las circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal prevista en los apartados: 1º, 2º y 3º del artículo 20 del CP.

*La regulación anteriormente mencionada, ha sido objeto de crítica por parte de la especializada doctrina. Más bien habría que haber regulado en general una medida de internamiento con regímenes diversos de cumplimiento en la línea de nuestro Derecho Penitenciario. El decisivo papel del juez de menores en la fase de ejecución posibilita una regulación unitaria con un alto grado de flexibilidad a la hora de diseñar el modo más idóneo de cumplir cada internamiento en función de las características del menor, pues régimen de internamiento es materia más propia del programa individualizado de ejecución de la medida que de una sentencia.*²⁰²

- 2) Permanencia de fin de semana: Aún establecido y dispuesto en el art. 21 apartado III de la Exposición de Motivos de la LRPM se indique que la permanencia de fin de semana lo será en el hogar del menor, la dicción literal del art. 7.1g) LRPM permite que la medida pueda cumplirse en un centro, criterio corroborado en el art. 28.3 del Reglamento.

“La permanencia de fin de semana es la expresión que define la medida por la que un menor se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo, a excepción del tiempo en que realice las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. En la práctica, combina elementos del arresto de finde semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la

²⁰² Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.8.

comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana”.

3.6.3 Medidas no privativa de libertad con orientación educativa

Este tipo de medidas van a ser siempre alternativas al internamiento, para casos muy graves, siendo la ultima ratio.

El tratamiento ambulatorio: El tratamiento ambulatorio trata las mismas situaciones que el internamiento terapéutico, con una única diferencia de que en estos casos es posible que el menor disponga de un tratamiento adecuado permaneciendo en su entorno.²⁰³

Consiste en la asistencia al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que atiendan al menor, siguiendo las pautas marcadas para el adecuado tratamiento de las anomalías o alteraciones psíquicas, de adicciones o de alteraciones en la percepción (arts. 7.1 e y 16 del Reglamento). Tal y como se explica en el apartado III.20 de la Exposición de Motivos, *“el tratamiento ambulatorio es una medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico que les ayude a superar procesos activos o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en su mejor interés puedan ser tratados de la misma forma que en la comunidad, en su realización pueden combinarse diferentes tipos de asistencia médica y psicológica. Resulta muy apropiado para casos de desequilibrio psicológico que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento. La diferencia más clara con la tarea socio-educativa es que ésta pretende lograr una capacitación, un logro de aprendizaje, empleando una metodología, no tanto clínica, sino de orientación psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio también puede entenderse como una tarea socio-educativa muy específica para un problema bien definido”*.

²⁰³ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.9.

Esta medida solo será de aplicación para los menores en quienes concurren cualquiera de las circunstancias existentes de la responsabilidad criminal previstas en los apartados 1º, 2º y 3º del art. 20 CP.

- 1) Asistencia a un centro de día: _Consistente en que los menores residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio (art 7.1 f LRPM). Respecto de la ejecución de la medida, en el art. 17.3 del Reglamento se señala que “tendrán la condición de centro de día los recursos incluidos en la red de servicios sociales de cada comunidad autónoma, siempre que se encuentren plenamente integrados en la comunidad y sean adecuados a la finalidad de la medida”.

En el apartado III 17 de la Exposición de Motivos se explica que *“En la asistencia a un centro de día, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el propósito de proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar aquel. Lo característico del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien este puede asistir también a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida”*.

- 2) Libertad vigilada: _Esta medida no privativa de libertad siendo de gran relevancia, pues es el más utilizado, junto con el de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, por los jueces de menores. En la Exposición de Motivos de la LRPM (apartado III.18) se señala que *“en la medida de libertad vigilada, el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal*

y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor también deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el Juez puede imponerle”.

En la extensa redacción del art 7.1 h) de la LRPM se indica que “en esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional a al lugar de trabajo según los casos, procurando ayudar a aquélla y superar los factores que determinaron la infracción cometida”.

A ello se suma, el que el menor tiene que seguir ciertas pautas socio-educativas y mantener entrevistas para cumplimentar su programa educativo así como a cumplir, si el Juez lo considera necesario, ciertas reglas de conducta (prohibiciones u obligaciones) como: la obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello; la obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares; la prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos; la prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa; la obligación de residir en un lugar determinado; la obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas; y, cualquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.²⁰⁴

Si de estas obligaciones alguna implicase la negatividad del menor a continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, estará legitimado el Ministerio Fiscal para remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá

²⁰⁴ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.10.

promover las medidas de protección adecuadas, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

La elección de la medida o medidas adecuadas debe entender el principio de flexibilidad, atendiendo no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente, a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor (art. 7.3 LRPM), si bien este criterio queda bastante atemperado con la nueva redacción del art. 9.

En cuanto a la ejecución de la medida, el art 18 del Reglamento se contempla la figura del profesional encargado de la misma, que carece de una denominación específica en la Ley, y que deberá elaborar un programa individualizado al respecto, exponiendo en su tenor literal *“los aspectos concretos referentes a los ámbitos personal, familiar, social, educativo, formativo o laboral en los que se considera necesario incidir, así como las pautas socioeducativas que el menor deberá seguir para superar los factores que determinaron la infracción cometida”*.

En este sentido añadir, en cuanto a esta medida la determinación de los órganos encargados de su cumplimiento ciertas peculiaridades.

Se trata, por tanto, de una medida que es competencia de la entidad pública autonómica, de acuerdo con las reglas generales de la competencia administrativa en materia de ejecución del art. 45 LRPM. Sin embargo, cuando se trata de una medida complementaria de una medida de internamiento en régimen cerrado en supuestos de especial gravedad (arts. 10.1 b, párrafo segundo, y 10.2 LRPM), pasa a ser competente de dicho cumplimiento (salvo en Cataluña) la Administración del Estado, a través de Instituciones Penitenciarias (arts. 10.4 LRPM y 8.3 de su Reglamento).

- 3) La convivencia con otra persona, familia o grupo educativo: La LRPM indica que *“la persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización”* (art.

7.1 j LRPM) el objetivo de esta medida, siendo hoy día poco utilizada por los jueces de menores, es apartar temporalmente al menor de un entorno delictivo, facilitando así la adquisición de pautas de inmersión en los valores socialmente adecuados.

Según la Exposición de Motivos de la Ley (apartado III. 22), “la convivencia con una persona, familia o grupo educativo es una medida que intenta proporcionar al menor un ambiente de socialización positivo, mediante su convivencia, durante un periodo determinado por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas profesionales en el menor”.

*En el proceso de selección se escuchará necesariamente al menor y, cuando sea el caso, a sus representantes legales, conservando aquél el derecho de relaciones con su familia, salvo que haya una prohibición judicial expresa.*²⁰⁵

- 4) Las prestaciones en beneficio de la comunidad: Es ésta una medida, que aparece por primera vez en nuestro ordenamiento en la LO 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y Procedimiento de los Juzgados de Menores.

Tal y como señala el art 7.1 k) de la Ley, “la persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad”.

En este sentido, el art. 20.2.b del Reglamento, en consecuencia, con lo mencionado en el apartado III.15 de la Exposición de Motivos de la Ley, señala, como una de las condiciones que deben reunir las actividades, que “estarán relacionadas, preferentemente, con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor”.

Se trata, sin embargo, de una orientación básica pero no del único criterio.

²⁰⁵ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.11.

Según lo mencionado por Feijoo Sánchez, de cara al éxito educativo de esta medida es conveniente tener en cuenta criterios específicos relacionados con el menor (aptitudes y habilidades, preferencias e intereses, experiencias previas, preparación, grado de esfuerzo necesario para realizar la prestación, etc.).²⁰⁶

La orientación educativa de la medida está dirigida a desarrollar su sentido de la responsabilidad, de la empatía social y que entienda que el desprecio de ciertas conductas está vinculada a las consecuencias nocivas de determinados comportamientos.

- 5) La realización de tareas socio-educativas: Consiste en la realización por parte del menor, sin internamiento ni libertad vigilada, de actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social (art. 7.1.I LRPM) y, también, según el apartado III.19 de la Exposición de Motivos, su reinserción social.

Se pueden citar como ejemplo las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un aula de educación compensatoria o a un curso de preparación para el empleo; participar en actividades estructuradas de animación sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social etc.

Esta medida suele ser aplicada por el Juez de menores cuando el menor presenta carencias relacionadas con la interacción social o educativa vinculadas a la comisión del hecho delictivo. Según establece el apartado 1 del art. 21 del Reglamento, cuando el horario del menor *“deberá ser compatible con el de la actividad escolar si el menor se encuentra en el periodo de la enseñanza básica obligatoria, y, en la medida de lo posible, con su actividad laboral”*.

- 6) La amonestación: Se trata de la medida más leve, suele imponerse a los menores comprendidos en edades entre los 14 y 16 años que todavía respeten las figuras de autoridad, que hayan cometido una infracción leve

²⁰⁶ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.11.

o no demasiado grave y que presenten un buen pronóstico y una socialización adecuada.

En virtud a lo dispuesto en el apartado III. 14 de la Exposición de Motivos y art. 7.1.m LRPM el juez, en un acto judicial manifiesta al menor las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él y para la víctima han tenido, le formula recomendaciones para el futuro, instándole a no volver a cometer tales hechos. Es destacable el hecho de que la Ley no establezca expresamente que la sanción tiene que ser pública y privada, ni tampoco las personas que deben estar presentes en el acto de amonestación. Se puede deducir, aunque como ya se ha comentado anteriormente no hay nada explícito, parece que la represión tiene que ser pública y, al menor deben estar también presentes el Fiscal, las partes personadas, el letrado del menor, un representante del equipo técnico y, si no se acuerda lo contrario, los representantes legales del menor (personas que, según el art. 35 LRPM).

3.6.4 Las medidas complementarias de las con orientación educativa

La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Se trata de una doble medida, englobada en el término “alejamiento” e introducida por la LO 8/2006, en la línea general de otorgarle un mayor peso a los intereses de las víctimas, con una redacción casi idéntica (salvo matices específicos como la referencia a centros docentes) a las de los apartados 2 y 3 del art. 48 del Código Penal.²⁰⁷

Según el apartado II.2 de la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 1/2007, de 23 de noviembre, “sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores de 2006”, cuando, se precisa que la medida tenga un contenido educativo, será preferible optar por articular la petición del alejamiento como regla de conducta en el marco de una medida de libertad vigilada.

²⁰⁷ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.12.

- 1) La privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor.
Es una medida restrictiva de derechos, también podrán imponerse como accesorias cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, arma, respectivamente (art 7.1 n de la Ley). En el caso de que no fueran ejecutadas directamente por el Juez de Menores, “se ejecutarán por los órganos administrativos competentes por razón de la materia” (art. 8.4 del Reglamento).
- 2) La inhabilitación absoluta: Regulada en el artículo 41 del Código Penal, la LO 7/2000E. El art. 10.3 de la Ley dispone la imposición de esta medida, contemplada ahora en la letra ñ) del art. 7.1, para el caso de que el delito cometido sea, precisamente, uno de los de terrorismo comprendidos en los arts. 572 a 579 del Código Penal.

En este sentido, la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 2/2001, de 28 de junio, sobre la “incidencia de las Leyes Orgánicas 7 y 9/2000, de 22 de diciembre, en el ámbito de la jurisdicción de menores”, señala en su apartado II. 1 que: *“la inhabilitación como tal puede ser también objeto de reducción, sustitución o alzamiento en fase de ejecución. No obstante, la finalidad específica que la Ley atribuye a esta medida, como medio de preservación de las instituciones democráticas, hace difícilmente concebible su sustitución por otra, por lo que lo más apropiado será acordar su alzamiento o reducción temporal en función de la evolución personal y educativa del menor, una vez se haya superado un período de tiempo prudencial en el que el reproche social de la conducta haya quedado suficientemente expresado y una vez quede claro que la participación del condenado en cargos públicos no representa ningún riesgo relevante para el funcionamiento de las instituciones”*.

3.6.5 Medidas cautelares

El artículo 28. LRPM determina las reglas generales de aplicación de diversas medidas de naturaleza cautelar, cuando existan indicios relacionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir (conjuntamente) u obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima.

Además, se tipifica en el art. 29 la posibilidad de la adopción de medidas cautelares en los casos de exención de la responsabilidad cuando quedara suficientemente acreditado que el menor se encuentra en situación de enajenación mental o en cualquiera otra de las circunstancias previstas en los apartados 1º, 2º y 3º del artículo 20 del CP.

Las primeras referidas anteriormente, son adoptadas mediante resolución judicial motivada y solamente deben mantenerse mientras persistan las razones que aconsejaron su adopción, podrán consistir en internamiento en régimen adecuado, es decir, en modo de prisión preventiva y atendiendo a la gravedad de los hechos, o la libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, (arts. 58 y 59 CP). Es importante destacar que el tiempo de cumplimiento de las medidas se abonará en su integridad para el cumplimiento de las que se puedan imponer en la misma causa o, en otras que hayan tenido por objeto hechos anteriores a la adopción de aquéllas.

En cuando a las segundas, se adoptarán las precisas para la protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables.

3.6.6 La mayoría de edad

Según establece el art. 14 LRPM, representa uno de los pilares del endurecimiento punitivo que representó la LO 8/2006, como regla general, cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanza la mayoría de edad.

Si un menor alcanza los dieciocho años cumpliendo una medida de internamiento en régimen cerrado, el Juez podrá ordenar que el cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario (art 14.2 LRPM). Será obligatoria esta medida cuando el sujeto tiene más de 21 años (art. 14.3 LRPM), siendo excepcional, aunque también posible, que permanezca en el centro de menores, en todo caso siempre que responda a los objetivos propuestos en la sentencia.

3.7 LA CONCILIACIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO

Según lo dispuesto en el art. 19 de la LRPM tipifica la conciliación y la reparación del daño entre el menor y la víctima. Ambas son dos manifestaciones del principio de oportunidad procesal reglada (art. 18 LRPM), en virtud de las cuales y cumplidos los requisitos legales, el Ministerio Fiscal podrá desistir de la continuación del procedimiento incoado contra el menor, siendo esencial el papel del medidor del Equipo Técnico y el informe que al respecto realice (art 27.3 LRPM y 5 de su Reglamento).

El apartado II.13 de la Exposición de Motivos de la LRPM, expone en su tenor literal: *“Un interés particular revisten en el contexto de la Ley los temas de la reparación del daño causado y la conciliación del delincuente con la víctima como situaciones que, en aras del principio de intervención mínima y con el concurso mediador del equipo técnico, pueden dar lugar a la no incoación o sobreseimiento del expediente, o a la finalización del cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez más, de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevención general y que pudiera resultar contraproducente para el futuro. La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa. La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto o disculparse. La medida se aplicará cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdón. En la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo más: el menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado”*.

Según el art. 19.2 LRPM, “se entenderá producida la conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte

sus disculpas, y se entenderá por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, siguiendo de su realización efectiva”.

En este sentido, el menor y la víctima se acogen a un proceso estigmatización por parte del menor, la víctima interviene en la resolución del conflicto emergente, además, evita así una posible segunda victimización.

La LRPM, hace alusión a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, consistentes en que: el hecho imputado al menor constituya “delito menos grave o falta” (esto es, los que el Código Penal art.13 castiga con pena menos grave o leve, respectivamente art. 33.3 y 4 LRPM) y que hayan sido cometidos sin violencia o intimidación.

Si atendemos a la fase de ejecución de la medida, la conciliación puede dejar sin efecto la medida impuesta en cualquier momento de su cumplimiento (arts. 51.3 LRPM y 15.1 de su Reglamento), si el Juez lo estima y lo notifica la entidad pública de protección o reforma de menores.

3.8 REGLAS ESPECIALES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

Los arts. 61 a 64 de la LRPM establece el ejercicio de la acción civil. Según LRPM en cuanto a la responsabilidad civil para los daños causados por menores de entre 14 años y 18 años, establece que los menores responderán civilmente por esos daños y solidariamente con él los padres, tutores, acogedores y guardadores.

La responsabilidad civil podrá verse moderada si éstos no hubieran favorecido con dolo o negligencia grave la conducta del menor (art. 61.3 LRPM). Según lo establecido en el art. 64 LRPM se puede deducir que el procedimiento ha de seguir las reglas generales contenidas en el CC y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.9 INCOACCIÓN Y LEGITIMACIÓN

En cuanto al inicio de la pieza separada de responsabilidad civil tendrá lugar al mismo tiempo que la recepción en el juzgado de Menores del parte de incoación del expediente procedente de la Fiscalía de Menores. (art 64.1 y 16.4 LRPM).

En este sentido, el parte de incoación deberá contener cuantas circunstancias consten en relación con la responsabilidad civil: descripción del hecho punible- pudiendo a tal efecto adjuntarse copia de la denuncia o del atestado, indicación de los menores presuntos responsables, así como de los perjudicados, etc.²⁰⁸

Estará legitimado de forma activa para iniciar la acción civil el perjudicado, además el Ministerio Fiscal también puede ejercitarla en su condición de clásico “sustituto procesal” del perjudicado (art. 108 LECrim). La LRPM ha introducido el plazo de un mes con carácter preclusivo, para comparecer, sino lo hace el Juez declara incoar el proceso. (art. 61.1 LRPM).

Ahor bien, respecto a la legislación pasiva corresponde al menor responsable de los hechos delictivos que originen la pretensión civil, los padres, tutores, acogedores y guardadores o, las entidades aseguradoras (art. 63 LRPM), y, finalmente la Administración Pública (art 61.4 LRPM).

3.10 EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Según lo establecido en el 62 de la LRPM dispone en su tenor literal “la responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del Libro I del CP, el contenido de los artículos 109 a 115 del Código Penal”.

En este sentido la responsabilidad civil se extiende a la restricción de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP).

²⁰⁸ Díaz-Maroto y Villarejo, j; *La responsabilidad penal del menor*, Aranzadi, Madrid, enero 2011, p.16.

3.11 PROCEDIMIENTO SENTENCIA Y RECURSOS

Una vez notificado el decreto de incoación del expediente del Ministerio Fiscal al Juez de menores, éste procede a la ordenación de la apertura de la “pieza de responsabilidad civil” y el secretario judicial notificará a los perjudicados su derecho a ser parte en la misma (arts. 16.4 y 64. 1º LRPM).

Si el perjudicado no reserva el ejercicio de la acción civil el Juez determinará que son competentes los demandados civiles, serán notificados para que comparezcan (art. 64. 2º y 3º LRPM). Una vez personados los presuntos perjudicados y responsables civiles, el Juez de Menores resolverá, continuándose el procedimiento por las reglas generales (art 64. 4º LRPM).

IV. ANÁLISIS DOCTRINAL

Son muchas las sentencias condenatorias a menores por la comisión de delitos desde la instauración en nuestro ordenamiento jurídico de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor.

A continuación, se hace mención a alguna de estas sentencias, teniendo en cuenta la alegación del legislador en cada una de ellas.

En primer lugar, según lo dispuesto en la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de septiembre, determina respecto a la responsabilidad penal del menor infractor en su tenor literal: *la responsabilidad civil que se dilucida en esta pieza, regulada en los arts. 61 y siguientes LORPM (RCL 2000, 90) en su redacción originaria, únicamente puede dimanar de un hecho constitutivo de infracción penal (delito o falta) cometida por un menor, es decir una persona mayor de 14 años, al tiempo de la comisión del hecho, y menor de 18 años (arts. 1.1 y 5.3 LORPM). La razón obedece a que, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre (RCL 2006, 2152) , a diferencia del proceso penal de adultos en el que en la sentencia penal condenatoria o absolutoria por la concurrencia de las eximentes del art. 20.1, 2, 3, 5 y 6 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , debía pronunciarse sobre la responsabilidad civil ex-delicto, salvo renuncia o reserva de acciones civiles por el perjudicado; en el de menores, dicha responsabilidad civil ni se decidía en el proceso principal de reforma*

denominado expediente, ni el pronunciamiento sobre si el hecho constituía una infracción penal y la partición del menor era exclusivo de la sentencia, porque la ley haciendo uso flexible del principio de intervención mínima, en función del interés superior del menor, contemplaba otras formas de finalización, como, el desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar, en el que expresamente se disponía, sin perjuicio de la obligación de que se tramitase la pieza de responsabilidad civil (art. 18 LORPM), como sucede en el caso de autos.²⁰⁹

Otra de las sentencias en este caso del Tribunal Supremo, de 4 de julio de 2001.²¹⁰ En la citada sentencia el MF, alega no tener lugar la responsabilidad penal del menor, haciendo mención al art 19 del CP. En este sentido expone en su tenor literal: *considera el Ministerio Fiscal recurrente que el art. 19 «supone una regla de la más completa exclusión de responsabilidad del menor para con las reglas del Código Penal ...» y que una vez que la LORRPM «ha entrado en vigor la fórmula de la exclusión de responsabilidad a efectos de las normas del Código Penal y de la LECrim para los menores de 18 años, ha de entenderse plena y sin exclusiones , so pena de incurrir en vulneración del principio de legalidad penal».* Pues bien, el legislador entiende que *no puede compartirse este criterio, según el cual la responsabilidad penal de los menores entre 14 y 18 años, exigible con arreglo a la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, conlleva la más completa exclusión de las reglas del Código Penal. Y ello porque precisamente el Código Penal constituye el catálogo de conductas por las cuales puede exigirse responsabilidad a los menores conforme a la LORRPM, y un referente permanente de sus disposiciones. La vulneración del principio de legalidad penal*

²⁰⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 4º, de 19 de septiembre de 2011. Recurso nº 410/2010. Resolución: RJ 2011/385969. <http://aranzadi.aranzadigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I3b6e1060164c11e1bd7e010000000000&base-guids=JUR\2011\385969&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad82d9b000001743254b820501065b8&src=withinResuts&spos=4&epos=4>

²¹⁰ Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de julio de 2001. Recurso: núm. 4683/1999 Resolución: RJ 2001/9553. <http://aranzadi.aranzadigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=Ie288dbc0f9ad11dbbf890100000000000000&base-guids=RJ\2001\9553&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad82d9a0000017432397ffa55c64d8c&src=withinResuts&spos=1&epos=1>

denunciada se produciría, por el contrario, si en la exigencia de responsabilidad a los menores entre 14 y 18 años se «excluyese» el Código Penal, y se sancionasen conductas ajenas al mismo.

Más adelante hace referencia el legislador a los preceptos legales 1, 5, 8 y 10 de la LRPM, así mismo expone en su tenor literal: basta dar lectura al artículo 1 de la LORRPM para comprobar lo anteriormente expresado. Constituye este precepto el pórtico de la Ley, que comienza con una Declaración general precisando: Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

El artículo 5 de la LORRPM que al establecer las bases de la responsabilidad de los menores dispone que los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el art. 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

En el mismo sentido el art. 8 que al referirse al principio acusatorio dispone que El Juez de Menores no podrá imponer una medida que... exceda... del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Código Penal, lo que necesariamente conlleva efectuar de algún modo la subsunción de la conducta del menor enjuiciado conforme a los tipos prevenidos en el Código Penal.

El art 10, relativo a la prescripción, que dispone que los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben: 1º A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años. 2º A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave. 3º Al año, cuando se trate de un delito menos grave. 4º A los tres meses, cuando se trate de una falta.

V. ESTADÍSTICAS

A continuación, se expone una gráfica, la cual muestra el porcentaje de menores detenidos e investigados por las principales tipologías penales.

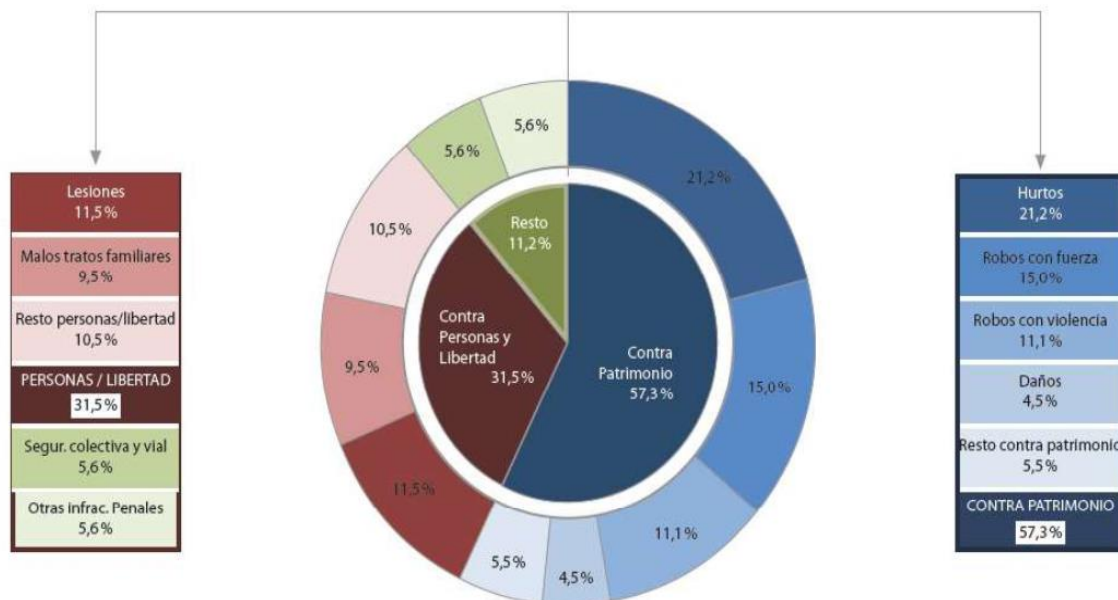


Figura 1. Fuente: Portal estadístico de criminalidad. Ministerio del Interior.

[file:///C:/Users/Propietario/Downloads/Dialnet-DossierII-7457559%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Propietario/Downloads/Dialnet-DossierII-7457559%20(2).pdf)

Según la gráfica up-supra, se puede deducir que el delito más cometido por menores en edades comprendidas entre los 14 y 18 son los delitos contra el patrimonio, con un porcentaje del 57,3%, siendo el más habitual el robo con fuerza. Le sigue por su alto grado de comisión el delito de lesiones contra las personas y la libertad con un porcentaje del 31,5%.

Según el Boletín Oficial de datos estadísticos en cuanto a las medidas (art. 7 LRPM) impuestas a los menores infractores en el año 2017, se expone en la siguiente gráfica.

Gráfico 1. Medidas Art. 7 - Notificadas

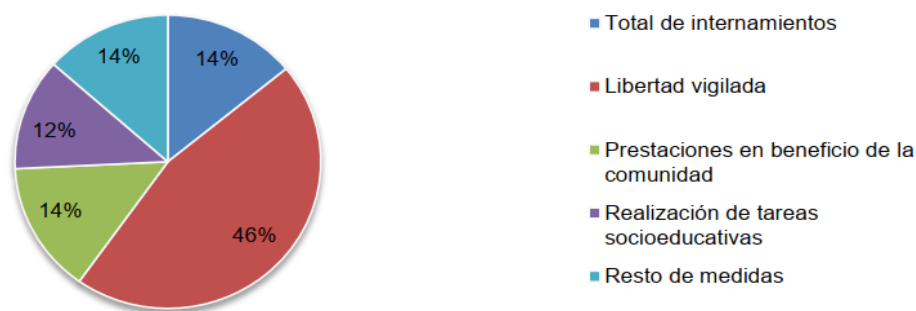


Figura 2. Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores. 2017. <https://www.mscbs.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/BoletinInfractores17DEFINITIVO.pdf>

Es claramente visible el alto porcentaje de imposición de medidas relativas a la libertad vigilada, concretamente con un porcentaje del 46%, frente al 14% y 12% de aplicación del resto de medidas.

Finalmente, se presenta una última gráfica en la que se reflejan los grupos de edades de los menores infractores con el número de medidas notificadas y ejecutadas por Comunidades Autónomas.

Gráfico 32. Comparativa CCAA - Medidas Art. 7 (LRPM) - Edad - Notificadas

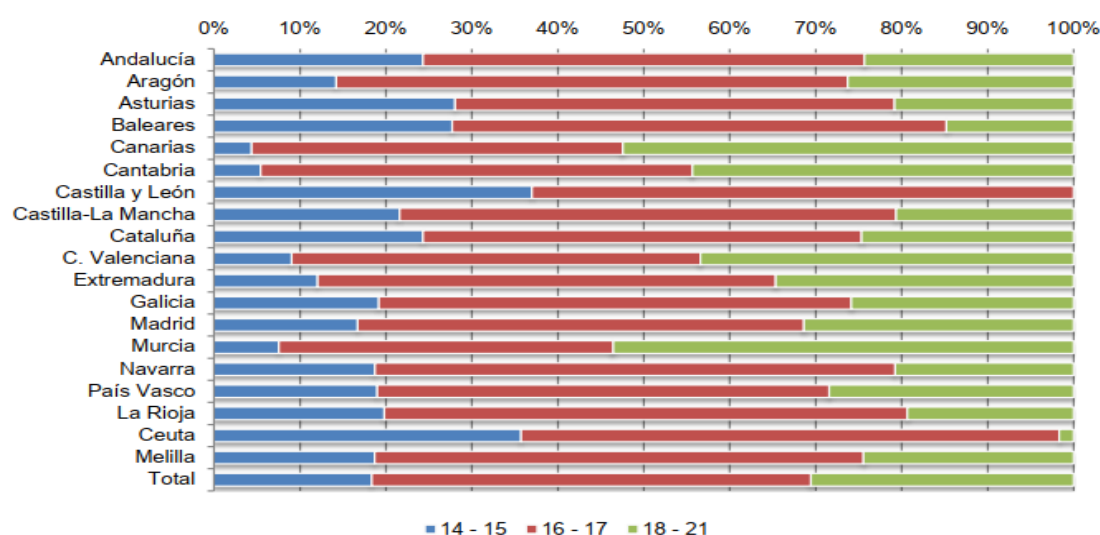


Figura 3. Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores. 2017. <https://www.mscbs.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/BoletinInfractores17DEFINITIVO.pdf>

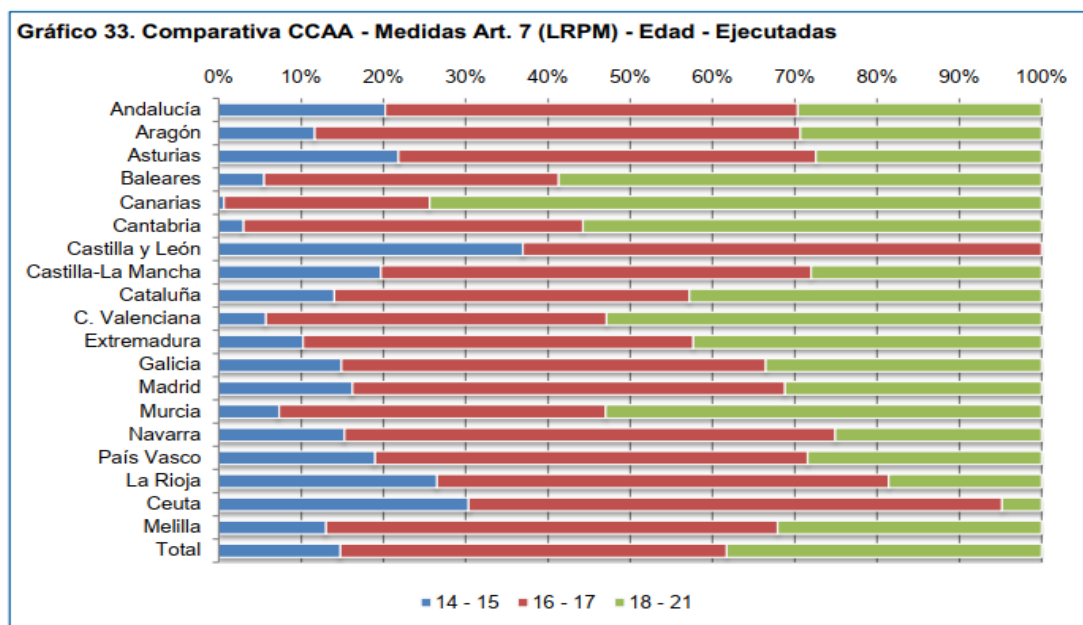


Figura 4. Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores. 2017.

<https://www.mscbs.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/BoletinInfractores17DEFINITIVO.pdf>

Como se puede observar en las tablas expuestas up-supra la franja de edad en la que existen una mayor notificación de medidas impuestas es de 16-17 años, siendo Castilla y León la comunidad con mayor número de comunicaciones en este tramo de edad.

En cuanto a la ejecución de medidas, aumentan en edades comprendidas entre los 18 y 21 años, siendo la comunidad de Canarias la mayor en cuanto a ejecuciones realizadas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, se obtienen los datos más recientes:

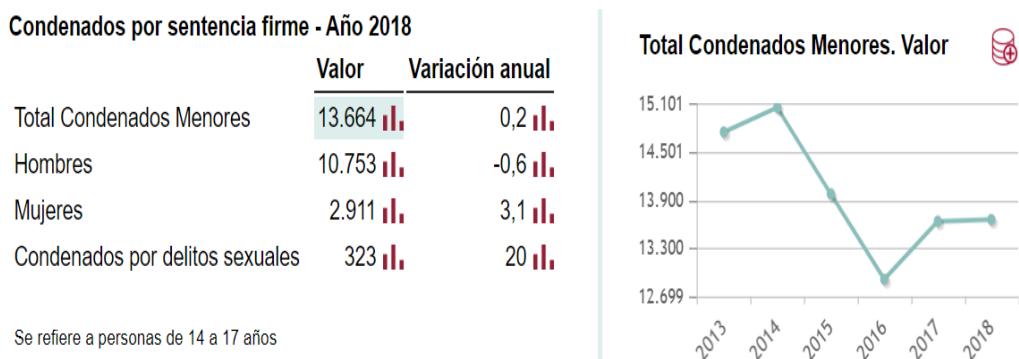


Figura 5. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de:

https://www.ine.es/dyns/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176795&menu=ultiDatos&idp=1254735573206

Son 13.664 los menores de 14-16 años condenados por sentencia firme en el año 2018, si comparamos este dato con los años anteriores podemos decir que se ha producido una significativa reducción de condenados por sentencia firme desde el año 2013 hasta el ya mencionado. se puede destacar la cifra recogida en el año 2014, 15. 101 condenados a sentencia firme.

Según los datos mostrados, se puede intuir una disminución en la criminalidad de menores respecto a años anteriores.

VI. CONCLUSIÓN

Los objetivos sobre los que se han cimentado el presente trabajo han sido dos. En primer lugar, determinar la congruencia o incongruencia en la estimación de una edad para responsabilizar penalmente a un menor. En segundo lugar, analizar si nuestra actual legislación, jurisprudencia y bibliografía valoran no solo el factor edad sino también el personal, psicológico y social para imponer la pena de privación de libertad a un menor de edad por responsabilidad penal.

Tras el estudio realizado se exponen las siguientes conclusiones:

1. La jurisprudencia y legislación, así como la doctrina analizada nos hace mover la balanza a favor de la incongruencia en la determinación de la edad del menor infractor en 14 años. Es por ello, que queda tipificado en nuestra legislación gracias a la instauración de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor. La cual establece la franja de edad relativa a la responsabilidad penal del menor de 14-18. A su vez, se establece dos tramos de edad, por un lado, de 14-16 y por otro de 16-18. La única diferencia de dichos tramos es la duración en la aplicación de medidas sancionadoras. Para los delitos graves, menos graves con violencia y delitos en grupo o banda, se diferencian los mayores y menores de 16 años. Respectos a los primeros las medidas no superarán los 6 años. En cuanto a los segundos, las medidas no superaran los 3 años.

Por otro lado, para los delitos de extrema gravedad, en mayores de 16 años será de 1 a 6 años de internamiento cerrado y libertad vigilada de hasta 5 años.

En cuanto a los delitos de homicidio, asesinato, agresión sexual, terrorismo y los castigados para adultos con pena de 15 años o más, con edades comprendidas entre los 14 y 15 años, se aplica de 1ª 5 años de internamiento cerrado y libertad vigilada de 3 años. Sin embargo, con edades comprendidas entre 16 y 17 años se aplica de 1 a 8 años de internamiento cerrado y libertad vigilada de hasta 5 años. Por último, en caso de terrorismo se aplica la inhabilitación absoluta de 4 a 15 años de internamiento cerrado.

Es por todo ello incongruente la justificación del legislador al determinar la responsabilidad penal mínima a los 14 años y no otra edad, pues alega que el menor tiene la capacidad de adquirir una madurez suficiente para ser consciente de sus actos y que por el contrario con menos edad no se podrá tener.

2. Se desprende del estudio realizado en los textos legales; jurisprudencia, legislación, así como doctrina la inexistencia en el factor personal del menor para imponer una u otra medida coercitiva.

En este sentido los artículos de la LRPM que se exponen a continuación en su tenor literal reflejan esa ausencia del factor personal del menor (circunstancias personales, sociales, psicológicas, etc.).

Art 1: 1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. 2. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España

Art. 3: Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad

con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

No podía finalizar este trabajo fin de master, sin antes no aportar un poquito de luz y esperanza, así como mi conocimiento en la materia ante este problema sin respuesta ofreciendo una posible solución.

Garantizar la formación relativa a la responsabilidad penal del menor, por parte de expertos y ejercientes, todos ellos profesionales en el ámbito penitenciario (psicólogos, psiquiatras, abogados, criminólogos y graduados sociales), es fundamental ya que se necesita conocer las características particulares de cada uno de los menores condenados (sus circunstancias personales, sociales, psicológicas, etc.) desde un enfoque multidisciplinar. Posteriormente la reunión, propuestas y ejecución de tratamientos específicos por parte de los expertos para el menor, no teniendo en cuenta la edad, pues la madurez del menor no depende de la edad, sino de las circunstancias y vivencias, es decir de la persona en sí. Consecuentemente se eliminaría la edad de responsabilidad penal de 14-18 años, así como las medidas coercitivas impuestas. Esta será la forma más ventajosa de alcanzar un eficaz tratamiento penitenciario.

Soy consciente de que es un gran reto que requeriría de un equipo multidisciplinar, pero del que creo que como criminóloga y abogada deberíamos formar una parte importante ya que tenemos mucho que aportar.

VII. BIBLIOGRAFÍA

AA. VV, Los menores en el derecho español, Tecnos, Madrid, 2002.

AGUDELO HERRERO. J; Los Toribios de Sevilla y los orígenes de la protección de los menores, en anuario de justicia de menores, 2009, nº IX.

AGUDELO HERRERO.J, La protección de los menores en EEUU y Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, en anuario de Justicia de Menores, 2012, nº XII.

BECERRA, C; “Alternativas educativas ante la responsabilidad penal de los menores infractores”, en Jornadas de Foment de la Investigació de la Universitat Jaume I, 2007.

BENITO ALONSO, F: “Los antecedentes históricos de la ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, como criterio de interpretación de la misma”, en La Ley, núm.5308, de 25 de mayo de 2001.

BERNARDO DE QUIROS, C y NAVARRO DE PALENCIA, A: Teoría del Código penal, Parte general.

BLANCO BAREA, J. A; “Responsabilidad Penal del Menor: principios y medidas judiciales aplicables en el Derecho Penal español”, Revista de Estudios Jurídicos, 8, 2008.

CÁMARA ARROYO, S, Derecho Penal de Menores y Centros de Internamiento. Una Perspectiva Penitencia, Tesis defendida en la Universidad de Alcalá de Henares, 2011.

CAMARA ARROYO. S, Internamiento de menores y sistema penitenciario, volumen I, Premio Nacional Victoria Kent, Ministerio del Interior, Madrid, 2011.

CAMPOS SÁNCHEZ, M; “Incidencia del nuevo Código Penal en la legislación de menores”, en Revista Jurídica de la Región de Murcia, 24, 1997.

CANO PAÑOS, M.A; “¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el Derecho Penal juvenil?, en Revista de Ciencia Penal y Criminología, 13, 2011.

CANTARARERO, R; “Los Menores y el Derecho Penal”, en Derecho Privado y Constitución, 7, 1995.

CANTARERO BANDRES, R: Ley de Tribunales Tutelares de Menores (Texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948) y Constitución”, en ADPCP,1986.

CANTERO, R: Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: Derecho penal y procesal de menores.

CARMONA SALGADO, C; “Legislación penal de menores en los sistemas jurídicos peruano y español. Un estudio comparativo”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 4, 2010.

COSSIO y GOMEZ-ACEBO, M: Las instituciones tutelares de la infancia abandonada.

CRUZ MÁRQUEZ, B; “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”, en AFDUAM 15,2011.

CRUZ MÁRQUEZ, B; “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”.

DE COSSIO Y GOMEZ ACEBO, M: Las instituciones tutelares de la infancia abandonada, Madrid, 1907.

DE LA ROSA GTIÉRREZ, G; “Imputabilidad y edad penal”, en BuscaLegis, 2007.

DE LOS SANTOS MARTÍN OSTOS J., Jurisdicción Penal de Menores, editorial Juruá, Lisboa, 2016.

DE ROJAS.F, El padre de huérfanos de Valencia, editorial Vives Mora, Valencia, 1927.

DELEITO J., La mala vida en la España de Felipe IV, Madrid, Alianza, 1987.

DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, j; La responsabilidad penal del menor, Aranzadi, Madrid, enero 2011.

DOMÍNGUEZ MARTÍN, A; “Responsabilidad penal de los menores: derechos para todos”, en Revista Lex Nova, 2007.

ETXEBARRIA ZARRABEITIA, XAVIER; Algunos aspectos de Derecho sustantivo de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y de su reforma en materia de terrorismo, en ICADE, Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, núm.53, Madrid, mayo- agosto.

FERNÁNDEZ MOLINA, E; “El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2012.

FERNÁNDEZ MOLINA.E. Y BERNUZ BENEITEZ. M.J, Justicia de menores, editorial Síntesis, Madrid, 2018.

FERNÁNDEZ VARGAS, V., El niño y el joven en España (siglos XVIII-XX), Barcelona, Anthropos,1989.

GARCÍA PABLOS, A; Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juristas, 2ºed., Valencia. 1996.

GARCÍA PÉREZ, O; “La reforma de 2006 del sistema español de justicia penal de menores”, en Política Criminal, 5, 2008.

GARCÍA VALDES, C: Los presos jóvenes. Apuntes de la España del XIX y principios del XX, Madrid, 1991.

GIMENEZ -SALINAS y COLMENAR, E: Delincuencia juvenil y control social.

GOMEZ HIDALGO, J.I; "Estudio de las medidas establecidas en la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de Menores".
<http://www.icace.org/pdf/b04articulo01.pdf>.

GRANADO PACHÓN, S.J, El menor infractor: evolución jurídica y mitos del tratamiento- penal actual, Tesis defendida en la universidad de Huelva, 2016.

GUALLART y LOPEZ De GOICOECHEA, J: El Derecho penal de los menores. Los Tribunales para niños.

JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; "Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2015.

JIMÉNEZ DÍAZ, M.J; "Menores y responsabilidad penal: el debate se reabre", en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 49, 2015, p.157-158.

JUDERÍAS, J., Problemas de la infancia delincuente, Madrid, Pro Infancia, 1910.

JUDERÍAS, J., La juventud delincuente, Madrid, Jaime Ratés, 1912.

LALINDE ABADIA, J; Iniciación histórica al Derecho Español.

LASALA G; Instituciones de protección y reforma en Valencia, Surgam, 1955.

LASALA, G., La juventud delincuente en España y sus tribunales de menores, Surgam, 1954.

LAUCES GUTIÉRREZ, A.I y VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C, “Justicia penal de menores en España. Aspectos sustantivos y procesales”, en Curso de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED, 2008.

LOPEZ RIOCEREZO, J.M: Delincuencia juvenil. Política recuperativa del joven delincuente, t.II, Madrid, 1960.

LÓPEZ SÁNCHEZ, C; La responsabilidad civil del menor, Madrid, 2001.

MAUSE, LL., Historia de la Infancia, Madrid, Alianza, 1982.

MIRET MAGDALENA, E: Hacia una Ley española del menor, en jornadas de estudio de la legislación del menor, Consejo Superior de Protección de Menores, Ministerio de Justicia, 1985.

MONTERO -RIOS y VILLEGAS, A: Antecedentes y comentarios a la ley de tribunales para niños, Madrid, 1919.

NIETO MORALES, C; Intervención con menores en conflicto con la ley.

OCTAVIO DE TOLEDO y UBIETO, E: Derecho penal. Parte general.

OLARTE RUIZ, S; La responsabilidad penal del menor, Universidad de la Rioja, la Rioja, 2018-2019.

PLATT, A., Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia, México, Siglo XXI, 1982.

RIBERA CAÑIZARES, M., “Comentarios a la ley de 25 de noviembre de 1918 sobre organización y atribuciones de los tribunales para niños”. En F. Bergamín y otros, Tribunales Tutelares para Niños, Madrid, Góngora, 1929.

RIOS MARTIN, J.C: El menor infractor ante la Ley penal.

ROCA T., Ramón Albó, ha muerto, Surgam, 1956.

ROCA T; El padre de los huérfanos en Zaragoza, Surgam, 1954.

ROCA T; Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España, Madrid, Consejo Superior de Protección de Menores, 1968.

ROLDÁN BARBERO, H., Historia de la prisión en España, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988.

SALDAÑA, Q: La reforma de los jóvenes delincuentes en España.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F, La jurisdicción de menores en España (presente, pasado y futuro), Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 1996.

SANCHEZ MARTINEZ, F: Antecedentes y nuevo enjuiciamiento de menores. Ley 4/1992, página 49 y siguientes; La obra de protección de menores, Consejo Superior de Protección de Menores, Ministerio de Justicia, Madrid, 1984.

TESÓN MARTÍN, F; La responsabilidad civil en la nueva Ley Penal de Menores, en Revista Jurídica. La Ley, T.7, Madrid, 2001.

VAQUER ALOY, A; La responsabilidad civil en la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores: una propuesta de interpretación, en Revista Jurídica La Ley, T.1, Madrid, 2001.

VENTAS SASTRE, R; La minoría de edad penal, Universidad Complutense de Madrid, 2006. ProQuest Ebook Central.
<https://search.proquest.com/legacydocview/EBC/3169927?accountid=139267>.

VIANA BALLESTER, C, “La responsabilidad penal del menor; naturaleza y principios informadores”, en Revista Penal, 13,2004.

VIDAL HERRERO, M.S. crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/200, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores hacia un “modelo social de responsabilidad” del menor infractor, Tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 2015.

VOLISZT, F: Tratado de derecho penal.

ZARANDIETA MIRANBENT. E; La delincuencia de los menores y los Tribunales para niños, imprenta clásica española, 1916.

ZUGALDIA ESPINAR, J.M; Fundamentos de derecho penal. Parte general.

VIII. ENLACES

Figura 1. Fuente: Portal estadístico de criminalidad. Ministerio del Interior.
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/Dialnet-DossierII-7457559%20(2).pdf

Figura 2. Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores. 2017.
<https://www.mscbs.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/BoletinInfractores17DEFINITIVO.pdf>

Figura 3. Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores. 2017.
<https://www.mscbs.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/BoletinInfractores17DEFINITIVO.pdf>

Figura 4. Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores. 2017.
<https://www.mscbs.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/BoletinInfractores17DEFINITIVO.pdf>

Figura 5. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176795&menu=ultiDatos&idp=1254735573206

Fuero Real de 1255. <http://fama2.us.es/fde/opusculosLegalesT2.pdf>;

Las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-siete-partidas-del-rey-don-alfonso-el-sabio-cotejadas-con-varios-codices-antiguos-por-la-real-academia-de-la-historia-tomo-3-partida-quarta-quinta-sexta-y-septima-0/html/01fb8a30-82b2-11df-acc7-002185ce6064_723.htm

Las XII Tablas del siglo V: http://ermoquisbert.tripod.com/dr/12t/12t_apunte.pdf;
última consulta: agosto 2020).

Página de la Real Academia Española, con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial. <https://dle.rae.es/> .

IX. LEGISLACIÓN

Artículo 118 y 119 del Proyecto de 1831 y Artículo 31 del Proyecto de 1834.

Artículo 35 del Proyecto de 1830 y Artículo 4 del Proyecto de 1831 y Artículo 15 del Proyecto de 1834.

Circular 1/2007 de la Fiscalía General del Estado sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores de 2006.

Circular 2/2001, de 28 de junio, de la Fiscalía General del Estado, incidencia de las Leyes Orgánicas 7 y 9/2000, de 22 de diciembre, en el ámbito de la jurisdicción de menores.

Circular1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/escarga/CI01-en:https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CI01-2000.PDF?IDfILE=18748173-3639-468e-9595-1d4c1b7ba6d7.

Código de las Costumbres escritas de Tortosa de 1919, http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000348216_V03/4#HEAD.

Código Penal de 1995: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>.

Código Penal español de 1822, <http://www.cienciaspenales.net/files/2016/03codigoPenal1822.pdf>;

Código Penal español de 1848, <http://fama2.us.es/fde/codigoPenal1848.pdf>

Código penal español de 1870 https://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigo_penal/index.htm

Código Penal español de 1932, <https://es.scribd.com/document/235086176/Codigo-penal-1932-pdf>

Código Penal español de 1973, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1715>.

Constitución democrática española de 1869, <http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1869.pdf?sfvrsn=4>

Constitución española de 1876, <Http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/187.pdf?sfvrsn=4>;

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, B.O.E. núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/PAGES/crc.ASPX>.

Decreto 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Decreto de 11 de junio de 1948 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, B.O.E. del E, de 19 de julio de 1948. <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1948/201/A03306-03318.pdf>.

Instrucción nº 5/2006 sobre los efectos de la derogación del artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Prevista por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MN_instruccion5_2006.pdf?idFile=912fc472-07b8-4116-bc8d-444706d8e918;

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, <https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.PDF>.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, B.O.E. núm. 11, de 13 de enero de 2000.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641>.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, B.O.E. núm. 157, de 2 de julio de 1985.

Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659>;

Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medias urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial http://noticias.jurídicas.com/base_datos/Admin/lo9-2000.html.

Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044>.

Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad penal de los menores (LO 5/2000 con sus reformas posteriores)

Leyes Asirias Medias del siglo XII:
<https://www.unizar.es/hant/Fuentes/leyasiria.hyaml>.

Leyes de Toro de 1505,: http://faculty.georgetown.edu/sallesrv/courses/SPAN-459/span459/pdfs/leyes_toro/leyes_96.pdf.

Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348.
<http://fama2.us.es/fde/ocr/2004/ordenamientoDeAlcala.pdf>.

Ordenanzas del Consejo Real de Castilla de 1385-1490,
<http://institucional.us.es/revistas/historia/07/07%20de%20dios.pdf>.

Partida Primera, Título 10, Ley 21.

Partida SÉPTIMA, TÍTULO 31, Ley 8.

Partida Séptima, Título I, Ley 9.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

Reglamento de Desarrollo (Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio).

X. JURISPRUDENCIA

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 4ª, de 19 de septiembre de 2011. Recurso nº 410/2010. Resolución: RJ 2011/385969.
[http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=l3b6e1060164c11e1bd7e0100000000000&base-guids=JUR\2011\385969&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad82d9b000001743254b820501065b8&src=withinResuts&spos=4&epos=4](http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=l3b6e1060164c11e1bd7e010000000000&base-guids=JUR\2011\385969&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad82d9b000001743254b820501065b8&src=withinResuts&spos=4&epos=4).

Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de julio de 2001. Recurso: núm. 4683/1999
Resolución: RJ 2001/9553.
<http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=le288dbc0f9ad11dbbf890100000000000&base-guids=RJ\2001\9553&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad82d9a0000017432397ffa55c64d8c&src=withinResuts&spos=1&epos=1>